TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 441/93, relativo a la dotación de tierras, promovido por un grupo de campesinos del poblado Santa Efigenia, Municipio de San Ignacio, Sin.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 441/93, que corresponde al expediente administrativo 2611/82, relativo a la solicitud de dotación de tierras, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "Santa Efigenia", ubicado en el Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa; en cumplimiento a la ejecutoria dictada el veintiocho de junio de dos mil dos, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo número D.A. 7513/2001-376, promovido por el Comisariado Ejidal del citado poblado, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito de cinco de abril de mil novecientos ochenta y dos, un grupo de campesinos radicados en el poblado "La Chicayota", solicitó al Gobernador del Estado de Sinaloa, dotación de tierras con el nombre de "Santa Efigenia", señalando como fincas afectables las ubicadas dentro del radio legal de afectación y asimismo, manifestaron que tenían cerca de dos años viviendo en el predio denominado "El Duranguito". En esta solicitud se propuso como integrantes del Comité Particular Ejecutivo a Manuel Espinoza Luna, Adrián Hernández G. y Benito Rascón Flores, como presidente, secretario y vocal, respectivamente.

SEGUNDO.- La Comisión Agraria Mixta del Estado instauró el expediente el treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y dos, al cual se le asignó el número 2611/82, girando los avisos de notificación correspondientes. Esta solicitud se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, el doce de julio del mismo año.

TERCERO.- Por oficio número 414/84, de tres de octubre de mil novecientos ochenta y tres, el Delegado Agrario en el Estado de Sinaloa, comisionó a Lorenzo Larrañaga Núñez, para que realizara inspección ocular en los poblados denominados "Santa Efigenia" y "La Chicayota" del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, y determinara el número de familias que se encuentran en cada núcleo; comisionado que en su informe de veinte de octubre de ese año, dio a conocer lo siguiente:

"...El 18 de octubre de 1993, me trasladé a los poblados 'Santa Efigenia', y 'La Chicayota', procediendo a investigar el número de familias que se encuentran actualmente viviendo, destacando que en el primer poblado se localizan 35 familias y en el segundo 10 familias..."

A este informe el comisionado acompañó copia de su oficio de comisión, y un documento en el que detalla el número de jefes de familia de cada poblado, así como el tiempo de radicar y el número de personas que integra cada familia.

CUARTO.- Por oficio número 2596, de doce de febrero de mil novecientos ochenta y dos, la Comisión Agraria Mixta, encomendó la práctica de trabajos técnicos e informativos al ingeniero Jaime Hugo López Gutiérrez, quien rindió informe el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, en los términos siguientes:

"...Una vez constituido en los poblados arriba señalados (se refiere a los poblados 'La Chicayota' y 'Santa Efigenia') se procedió a llevar a cabo la localización de los terrenos presuntamente afectables ubicados dentro del radio legal de afectación:

1.- Finca rústica, con superficie de 113-40-00 Has. ubicada en el predio 'Duranguito', propiedad de FERNANDO MANCILLAS MAYORQUIN, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. 122 del libro No. 18 de documentos públicos, misma superficie que se encuentra sin explotación de ninguna clase por parte del dueño, sólo se encontró desmontes ocasionados por los solicitantes.

2.- Finca rústica, con superficie de 43-90-00 Has., ubicada en el predio de 'Duranguito', propiedad de JUAN GAVICA VILLANUEVA, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el No. 101, libro No. 18, parte segunda, encontrándose a la fecha sin explotación de ninguna clase, teniendo la calidad de terreno de temporal con monte alto y partes chamizales igual que el primero mencionado.

3.- Finca rústica, con superficie de 122-40-00 Has. de temporal con un 45% de terreno salitroso propiedad del Ing. JUAN J. GAVICA VILLANUEVA, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el No. 101, del libro No. 18, parte segunda, encontrándose enmontado y en estado ocioso por parte del dueño, sólo se encuentran porciones abiertas al cultivo por parte de los grupos solicitantes.

4.- Finca rústica, con superficie de 200-00-00 Has., en su mayoría se encuentran constituidos por terrenos salitrosos, encontrándose una superficie de 70-00-00 Has. aproximadamente de temporal, enmontado y en estado ocioso, propiedad de JORGE ALFEGO CORDOVA IBARRA, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el No. 192 y 187 del libro No. 16.

5.- Finca rústica propiedad de CARLOS ALBERTO CORDOVA CARREON, con una superficie aproximada de 160-00-00 Has. de temporal, de las cuales se encuentran aproximadamente 40-00-00 Has. salitrosas, encontrándose sin explotación de ninguna clase por parte del dueño sólo partes desmontadas y en explotación por los solicitantes, misma finca se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. 192 y del libro No. 16.

6.- Finca rústica propiedad de INMOBILIARIA POZOED, S.A., con superficie de 50-71-95 Has., en las cuales los solicitantes tienen abiertas al cultivo aproximadamente 30-00-00 Has. y el resto son terrenos salitrosos.

7.- Finca rústica propiedad de INVERSIONES SOL DEL OESTE, S.A., con superficie de 41-46-74 Has., de las cuales 20-00-00 Has. están abiertas al cultivo y en explotación por los solicitantes y el resto se encuentran enmontadas, asimismo, aproximadamente 12-00-00 Has. son salitrosas, la finca en mención se encuentra inscrita bajo el No. 187 libro 20 en el Registro Público de la Propiedad.

8.- Finca rústica propiedad de INVERSIONES PARAISO, S.A., la primera con superficie de 15-78-00 Has. y otro de 10-57-00 Has., otro de 9-78-00 Has. y el último de 18-50-00 Has., las cuales se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad, bajo el No. 64, libro 18, dentro de las superficies antes mencionadas, se encuentran porciones abiertas al cultivo por los solicitantes, asimismo, en estado ocioso por parte del dueño.

9.- Dos fincas rústicas propiedad de INVERSIONES PARAISO, S.A., la primera con superficie de 7-60-16 Has., la segunda con 8-66-76 Has. que forman una sola unidad, las cuales se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad, bajo la inscripción No. 82 del libro No. 18, dicha superficie se encuentra en estado ocioso por parte de los dueños.

10.- Finca rústica propiedad de INMOBILIARIA LAS LABRADAS, S.A., con superficie de 36-92-00 Has., de las cuales 26-00-00 Has. aproximadamente son de temporal y el resto de terreno salitroso, encontrándose a la fecha en estado ocioso por parte del dueño sólo se encuentran porciones abiertas al cultivo por los solicitantes.

11.- Finca rústica propiedad de MARTHA LILIA PALACIOS SARABIA, con superficie de 200-00-00 Has. de agostadero con el 35% aproximadamente de temporal, la cual se encuentra constituida por monte alto sin explotación agrícola o ganadera, sólo se encontraron rasgos de corte de madera, inscrita bajo el No. 196, libro No.16.

12.- Finca rústica propiedad de RAUL PALACIOS SAINZ, con superficie de 206-00-00 Has., de agostadero con un 45% de temporal, la cual se encuentra constituida por monte alto en estado ocioso, inscrita en el Registro Público bajo la inscripción No. 190 del libro 16.

13.- Finca rústica propiedad de MA. NORMA PALACIOS SAINZ, con superficie de 210-00-00 Has. de temporal con un 50% de agostadero, constituido de monte alto, en estado ocioso por parte de la dueña con porciones abiertas al cultivo por los solicitantes dentro del mismo lote se encuentran constituidos los poblados 'CHICAYOTA KM. 1116' y 'SANTA EFIGENIA', con superficie aproximada de 16-00-00 Has., la finca se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo la inscripción No. 199, libro 16.

14.- Finca rústica propiedad de MA. EVANGELINA PALACIOS SAINZ, con superficie de 204-00-00 Has. de agostadero con el 50% de temporal, constituido por monte alto y en estado ocioso por parte de la dueña, sólo se encuentran porciones abiertas al cultivo por los solicitantes, dicha finca se encuentra inscrita en el Registro Público bajo el No. 197, del libro 16.

15.- Finca rústica propiedad de OCTAVIO GAXIOLA, con superficie de 200-00-00 Has. de temporal con el 40% de agostadero, dicha finca se encuentra en explotación agrícola ganadera, dentro de este se encuentran corrales de ordeña y una casa-habitación.

16.- Finca rústica, propiedad de MARTIN OSUNA RAMIREZ, con superficie de 204-00-00 Has. de temporal con el 45% de agostadero dentro de dicho lote en el momento de llevar a cabo el trabajo del levantamiento topográfico se observó que sólo se encontraban pastando aproximadamente de 6 a 8 animales vacunos, el terreno se encuentra constituido de monte alto y con porciones abiertas al cultivo por los solicitantes, así mismo, dentro de éste en un área aproximada de 17-00-00 Has., se encuentra parte del poblado 'EL POZOLE', el campo deportivo y dos aulas de la escuela primera, se encuentra registrado en el Registro Público bajo la inscripción No. 91 del libro No. 20.

17.- Tres fincas rústicas, propiedad de LUIS HERON RODRIGUEZ ALDACO, la primera con 1,643-00-00 Has., la segunda con 100-00-00 Has., la tercera con 56-00-00 Has., la primera es de agostadero cerril, la segunda es de temporal con el 40% de agostadero y la tercera es de temporal y dentro de ésta se encuentra una casa habitación y corral de ordeña, siendo en el lote No. 3 donde se encuentra una explotación ganadera con 27 cabezas de ganado vacuno aproximadamente y los dos lotes restantes se encuentran constituidos de monte alto de los cuales no se encontraron señales de explotación alguna.

18.- Finca rústica propiedad de IRMA PALACIOS SAINZ, con superficie de 104-17-62 Has. de agostadero con un 20% de temporal la cual se encuentra constituida por monte alto sin explotación de ninguna clase.

19.- Finca rústica propiedad de RUTH DEL SOCORRO PALACIOS SAINZ, con superficie de 104-17-62 Has. de agostadero con el 20% de temporal, la cual se constituye de monte alto sin explotación de ninguna clase.

20.- Finca rústica propiedad de NORMA PALACIOS SAINZ, con superficie de 104-17-62 Has. de agostadero con el 20% de temporal, constituido de monte alto sin explotación de ninguna clase.

21.- Finca rústica propiedad de JESUS RAUL PALACIOS SAINZ, con superficie de 104-17-62 Has. de agostadero con el 20% de temporal constituida de monte alto y en estado ocioso.

22.- Finca rústica propiedad de FRANCISCA SARABIA VDA. DE PALACIOS, con superficie de 1,874-00-00 Has. de agostadero con un 20% de temporal dentro de dicho lote, se encuentra constituido un rancho, el cual se le denomina 'La Chicayota', dentro del mismo pasta ganado propiedad de la Familia Palacios, siendo éste aproximadamente 40 cabezas de ganado vacuno, la finca en mención se encuentra inscrita en el Registro Público bajo la inscripción No. 74 del libro No. 19 de fecha 27 de enero de 1976.

23.- Finca rústica propiedad de CARLOTA IBARRA VDA. DE CORDOVA, con superficie de 100-00-00 Has. de agostadero con el 20% de temporal, la cual se encuentra constituida por monte alto en estado ocioso..."

QUINTO.- Por oficio número 252/34 de diez de abril de 1984, la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Subsecretaría de Organización y Desarrollo Agrario que coordina el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural en los municipios de Cosalá, Elota y San Ignacio, Estado de Sinaloa, comisionó al ingeniero Jesús Alcaraz Camacho, a efecto de que investigara la superficie que tienen en posesión los campesinos del poblado "Santa Efigenia", comisionado que en su informe de veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, dio a conocer que en el poblado "Santa Efigenia", existen cincuenta y un personas con parcela, la parcela escolar y la unidad agrícola industrial para la mujer, en tanto que en el poblado "La Chicayota", existen ocho personas con parcelas.

A su informe el comisionado anexó acta de inspección ocular de trece de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, que contiene la relación de campesinos que están en posesión de las parcelas.

SEXTO.- La Comisión Agraria Mixta por oficio número 1383 de ocho de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, instruyó a Jaime Hugo López Gutiérrez, con el objeto de que se trasladara al poblado solicitante y llevara a cabo trabajos censales y técnicos e informativos, comisionado que rindió su informe el diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, en el que se destaca lo siguiente:

"...En virtud de lo anterior, me trasladé al poblado 'La Chicayota', lugar donde radican los presuntos solicitantes de dotación del poblado Santa Efigenia, habiéndolos visitado en varias ocasiones con la finalidad de checar la existencia de los solicitantes, así como su arraigo en el lugar; de lo antes expuesto se deduce que los solicitantes firmantes en la solicitud de ejido, en la actualidad sólo existen 10 solicitantes avecindados en el poblado 'La Chicayota'; y que de 3 veces que fui a investigarlos, siempre encontré diferentes personas, ya que las anteriores se iban a radicar a sus lugares de origen, y el líder que encabeza el movimiento Manuel Espinoza Luna, acarrea gente de diferentes partes del estado y de la República, con la promesa de que ya tenía el ejido constituido y que les entregaría su parcela; es por eso que para las investigaciones que se realizaban no se notificaba a los interesados con tiempo, para evitar el peregrinar de solicitantes acarreados..."

El comisionado anexó a su informe, escrito de veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, mediante el cual el Presidente Municipal de "San Ignacio", Estado de Sinaloa, hace constar que en el libro de registro y en los archivos a cargo del Ayuntamiento, no existe el poblado "Santa Efigenia", sino que tiene antecedentes que así se le asignó a un grupo de solicitantes de tierra, mismos que tienen su residencia en el poblado "La Chicayota". También acompañó el informe que rindiera el ingeniero Lorenzo Larrañaga Núñez, quien fue comisionado el tres de octubre de mil novecientos ochenta y tres, por el Jefe de la Brigada Prider en los municipios de Cosalá, Elota y San Ignacio, del Estado de Sinaloa, a fin de que investigara la existencia de los poblados "Santa Efigenia" y "La Chicayota" del Municipio de San Ignacio, y mediante inspección ocular que verificó, en su informe de veinte de octubre de ese mismo año, manifiesta que en el poblado "Santa Efigenia", existen treinta y cinco familias y en el último diez familias.

SEPTIMO.- La Comisión Agraria Mixta, el dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y seis, emitió dictamen considerando improcedente la acción de dotación de tierras, en virtud de que no se reúne el requisito establecido en el artículo 195 de la Ley Federal de Reforma Agraria, dejando expedito el derecho del grupo peticionario para que previa satisfacción de los presupuestos de procedibilidad, promuevan la acción agraria que corresponda.

El Gobernador del Estado de Sinaloa, no emitió mandamiento.

OCTAVO.- El Delegado Agrario, previo resumen del caso, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, propuso negar la acción de dotación de tierras, en virtud de que no existe el poblado "Santa Efigenia"; y por oficio número VI/25508 de esa misma fecha, remitió el expediente para su estudio y resolución en segunda instancia.

NOVENO.- La Sala Regional del Cuerpo Consultivo Agrario del Noroeste, por oficio número 334 de doce de agosto de mil novecientos ochenta y siete, solicitó al Delegado Agrario en el Estado de Sinaloa, la práctica de trabajos técnicos informativos al estimar que los practicados con anterioridad presentan discrepancias. En tal virtud, por oficio 60584 de seis de mayo de mil novecientos ochenta y siete, se comisionó a María Eugenia Cruz Pasos, quien rindió su informe el ocho de septiembre del mismo año, del que se desprende en lo que interesa, lo siguiente:

"...TRABAJOS DESARROLLADOS POR LA SUSCRITA.- Con fecha 31 de mayo del presente año, me constituí en el poblado denominado 'LA CHICAYOTA', Km. 1116, Sindicatura de Dimas, del Municipio de San Ignacio, de esta Entidad Federativa, lugar donde tiene su asentamiento urbano el núcleo agrario 'SANTA EFIGENIA', previa convocatoria que fue fijada por la suscrita en los lugares más visibles del lugar de fecha 19 de mayo citando al núcleo peticionario para el día 31 de mayo, con el fin de darles a conocer los trabajos a realizar, así como la instalación de los trabajos censales, por causas ajenas a todos dicha Asamblea no se llevó a cabo, fijando una segunda Convocatoria de fecha 5 de junio, citando para el día 14 del mismo mes y año.

Quiero hacer la aclaración que el procedimiento que procede (sic) al levantar un censo agrario, no fue llevado a cabo por la suscrita en virtud de que el grupo peticionario no tiene registrado el poblado, lo cual demuestro con constancia proporcionada por el Síndico Municipal de 'DIMAS', Municipio de San Ignacio, de esta Entidad Federativa, aunque también es cierto que sí existe un caserío donde se encuentra enclavado el grupo solicitante o sea un asentamiento urbano y se encuentran divididos por una calle de por medio del poblado 'LA CHICAYOTA KM. 1116'. Ahora bien, me fue proporcionada por parte de los interesados constancia expedida por el Presidente Municipal de San Ignacio, Sinaloa, de fecha 28 de julio del presente año, donde hace constar lo siguiente: "Que el centro de población denominado 'SANTA EFIGENIA', es una comunidad perteneciente a la Comisaría de la 'CHICAYOTA', Sindicatura de Dimas, de esta Municipalidad, la que actualmente cuenta con una población aproximada de 70 habitantes. La constancia proporcionada se anexa al presente informe.

Con relación a los trabajos censales una vez reunidos en la Asamblea convocada, procedí a levantar un censo con las personas que se encontraban presentes en el lugar, obteniéndose el siguiente resultado:

NUMERO TOTAL DE HABITANTES...	246
NUMERO TOTAL DE JEFES DE HOGAR	59
NUMERO TOTAL DE CAPACITADOS	96

(Datos de los poblados 'La Chicayota' y 'Santa Efigenia')

...En lo que se refiere a los trabajos técnicos informativos relacionados en el artículo 286, fracciones II y III de la Ley Federal de Reforma Agraria, con fecha 20 de mayo, se notificó personalmente a los propietarios ubicados dentro del radio legal de 7 kilómetros, haciendo la aclaración que la fecha de la notificación

es por que en esas fechas, la suscrita se encontraba realizando trabajos técnicos informativos complementarios para el poblado 'La Chicayota Km. 1116', y los propietarios investigados fueron los mismos para ambos expedientes.

Previa notificación hecha a los propietarios, con fecha 22 de mayo de 1987, procedimos a realizar las inspecciones oculares a las propiedades ubicadas dentro del radio legal de 7 kilómetros del poblado peticionario, encontrándose todas éstas dentro del predio 'EL DURANGUITO', Sindicatura de 'DIMAS', Municipio de San Ignacio, de esta Entidad Federativa, encontrando la siguiente situación:

LOTE DE TERRENO PROPIEDAD MARIA FELIPA DE JESUS LOZANO GUERRA DE RODRIGUEZ.- Con superficie de 1,388-51-27 Has. de temporal este lote se encuentra enmontado, vegetación alta arbustiva, lo utilizan como agostadero enmontado, se encuentra delimitado por cerco de alambre de púas y postes de madera, cuenta con los siguientes linderos: AL NORTE, Ejido 'TOYHUA Y SUS ANEXOS', al SUR, OCTAVIO GAXIOLA GAXIOLA, MARTIN OSUNA RAMIREZ y propiedad del mismo, OTE. Ejido 'TOYHUA Y ANEXOS', y PTE. FRANCISCA SARABIA DE PALACIOS.- Adquirió mediante escritura pública número 1895, volumen LVIII de fecha 21 de diciembre de 1978, del Protocolo del Notario Público, Lic. FERNANDO A. ORRANTIA, pasada en la Ciudad de Mazatlán, Sin., se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de San Ignacio, Sin., bajo la Inscip. No. 47 del Libro No. 20, Sección I...

...Con lo anterior, se concluye con las inspecciones oculares a las propiedades ubicadas dentro del radio de 7 kilómetros, encontrándose en el mismo, el ejido 'TOYHUA Y ANEXOS', 2da. ampliación de Dimas, N.C.P.E. PIAXTLA DE ABAJO'...".

A este informe la comisionada anexó copias de los oficios de notificación a propietarios de predios; copias de oficios mediante los que solicitó información de estos predios al Registro Público de la Propiedad y de la Oficina de Catastro de San Ignacio, Sinaloa; informes proporcionados por estas autoridades de veinte y veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y siete, respectivamente; constancia del Síndico Municipal de Estación Dimas, de treinta de mayo de mil novecientos ochenta y siete, en la que se manifiesta que no existe ningún poblado con el nombre de "Santa Efigenia"; copias de las actas de inspección ocular, sin fechas selladas por la autoridad municipal del lugar; convocatoria y acta relativa a la reorganización del Comité Particular Ejecutivo; documentos que contienen los datos de campesinos censados; copias simples de escrituras públicas que amparan fracciones de terrenos del predio "El Duranguito".

DECIMO.- Por oficio número 86/91 de primero de febrero de mil novecientos noventa y uno, la Delegación Agraria en el Estado de Sinaloa, comisionó a Jesús Alcaraz Camacho, a efecto de que llevara a cabo inspección ocular para determinar la existencia del poblado "Santa Efigenia", al respecto el funcionario en su informe de trece de febrero de mil novecientos noventa y uno, manifestó:

"...Con fecha 6 de Febrero de 1991, me trasladé al Municipio de San Ignacio, de esta Entidad Federativa, y en inspección ocular realizada se comprobó que el poblado de 'SANTA EFIGENIA', Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, sí existe se encuentra ubicado a 15 Km. al oeste de la Sindicatura de DIMAS, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa con un camino de terracería cuyas colindancias son las siguientes norte: camino vecinal al poblado de DIMAS sur; caserío denominado La Chicayota al este; con el ejido Toyhua y anexos al oeste: con la vía del ferrocarril, está integrado por 40 casas habitación se encuentran construidas la mayoría de láminas de cartón, madera y palma que alojan aproximadamente 48 familias, además se pudo constatar que cuenta con una Escuela Primaria Rural de nombre RAFAEL BUELNA TENORIO, de la cual instruye a 30 alumnos que cubre de 1o. al 4o. año, también cuenta con un Templo (Iglesia) tipo ramada en proyecto de construcción una casa para las juntas de la comunidad construida de lámina y madera con su terreno propio cercado con poste de madera, también se constató que el poblado de SANTA EFIGENIA se formó desde el año de 1978..."

El comisionado anexó a este informe el acta de inspección ocular levantada el seis de febrero de mil novecientos noventa y uno.

DECIMO PRIMERO.- El Delegado Agrario en el Estado de Sinaloa, por oficio número 60476 de treinta de abril de mil novecientos noventa y dos, comisionó al ingeniero Martín Padilla García, para que realizara trabajos técnicos informativos ordenados por el Cuerpo Consultivo Agrario, a través de acuerdo de treinta de enero de mil novecientos noventa y dos. El comisionado en su informe de veinte de junio de mil novecientos noventa y dos, apuntó:

"...INVESTIGACION DE CAPACIDAD AGRARIA.- Se llevó a cabo el día 24 de mayo de 1992, a las 12:00 Has. previa convocatoria de fecha 11 de mayo de 1992, estando todos los interesados en el lugar acostumbrado para sesionar se dio inicio a la investigación dando como resultado lo siguiente: 17 hombres, 8 mujeres, faltando únicamente los CC. Manuel Hernández Gallardo, que dicen tener una superficie de 1-00-00 (una hectárea) desmontada y la Sra. Juana Gallardo López que tiene una superficie de 2-00-00

(dos hectáreas) desmontadas, estas dos personas no estuvieron presentes en la investigación realizada, pero las autoridades ejidales reconocen sus derechos como miembros activos del grupo 'Santa Efigenia'.

TRABAJOS REALIZADOS POR EL COMISIONADO.- Después de haberme documentado ampliamente de los archivos de esta Delegación, me trasladé al poblado 'Santa Efigenia', Municipio de San Ignacio, entrevistándome con los CC. Ramón Durán Hernández y Reyes Baltazar Coronel, quienes ostentan los cargos de Presidente y Tesorero del núcleo ejidal solicitante ya mencionado, dándoles a conocer el motivo de mi visita al poblado, dándome la anuencia para hacer los trabajos técnicos complementarios, de investigación de capacidad agraria; se procedió a fijar convocatoria extraordinaria por primera vez, el día 11 de mayo de 1992, en los lugares más visibles del poblado, para celebrarse el 24 de mayo del mismo año. Por segunda vez me constituí en el poblado, se pasó a realizar la investigación agraria dando como resultado: 17 hombres y 8 mujeres, haciendo un total de 25 capacitados, faltando únicamente Manuel Hernández Gallardo y Juana Gallardo López, pero se les reconocen sus derechos como ejidatarios. Haciendo un recuento de la cantidad de hectáreas desmontadas que poseen los solicitantes son únicamente 63-00-00 Has., pero según el representante ejidal del poblado, manifestaron (sic) que tenían 300-00-00 Has. abiertas al cultivo, pero fue con la solicitud inicial de dotación de tierras de ejido de 5 de abril de 1992, (sic), de los cuales la mayoría de los solicitantes emigraron a otros lugares para un medio de vida mejor para sus familias; también se anexa plano donde se señala que son los mismos terrenos que solicitan 'Santa Efigenia', como 'La Chicayota Km. 1116'.

También se convocó a celebrar asamblea a los integrantes del grupo denominado 'Chicayota Km. 1116', que fue fijada el mismo día que a los de la 'Santa Efigenia' únicamente con diferencia de horario. Para celebrarse el día 24 de mayo de 1992, notifiqué al grupo de 'La Chicayota Km. 1116' de los trabajos a realizar en el poblado vecino, hacer una investigación de capacidad agraria a 27 campesinos solicitantes de dotación y la posible unificación de los 2 grupos solicitantes para formar una sola acción, pidió la palabra Antonio Naranjo, quien funge como Comisariado Ejidal haciendo saber que no firmaría nada, argumentando que el problema no era de ellos, porque ya estaba por salir la resolución presidencial a favor de 'La Chicayota Km. 1116', y que ya se había elaborado un convenio ante la C.N.C. el 8 de diciembre de 1991, donde dice que en forma unánime que las 42 personas capacitadas ya están posesionadas mediante una asamblea y que las personas faltantes se les posesionara donde se localicen terrenos compartidos para cultivo de lo bueno y lo malo, firmando como representación de los núcleos agrarios de común acuerdo, los solicitantes, tanto de 'La Chicayota Km. 1116' como los de la 'Santa Efigenia', haciendo notar que en el acuerdo tomado ante la C.N.C., hay varias anomalías con respecto a las firmas de los grupos apareciendo más un grupo que del otro y repetidamente también se hace notar que Reyes Baltazar Coronel, quien funge como Tesorero me hace saber que efectivamente se hizo un acuerdo de notificación de los 2 grupos, pero era de 27 solicitantes de 'Santa Efigenia' y 27 de 'La Chicayota Km. 1116' para formar un grupo de 54 solicitantes, y una sola acción agraria, pero al comisionado no se le comprobó dicho acuerdo. Se mandó notificación al grupo ejidal 'La Chicayota Km. 1116', para llevar asamblea con la finalidad de hacer que los 2 grupos se unieran, el día 14 de junio de 1992, negándose a recibir dicha notificación el representante del primer núcleo mencionado, por lo cual se procedió a buscar a las autoridades municipales para que dieran fe de los hechos...".

El comisionado anexó a su informe acta de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y uno, mediante la que los integrantes de los grupos solicitantes de tierra denominados "La Chicayota" y "Santa Efigenia", pretendieron tramitar conjuntamente el asunto ante la Secretaría de la Reforma Agraria, respetándose la posesión de terrenos que cincuenta y un personas ostentan y que se respetarán los terrenos que se encuentran desmontados hasta en tanto el asunto se resuelva en definitiva; también agregó los documentos relativos a estudios de capacidad agraria y acta relativa a trabajos censales de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y dos.

DECIMO SEGUNDO.- El Cuerpo Consultivo Agrario, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, dictaminó que se niega la acción de dotación de tierras, promovida por campesinos del poblado "Santa Efigenia", en virtud de que no se reúne el requisito de capacidad agraria previsto en el artículo 196 fracción II de la Ley Federal de Reforma Agraria aplicado en sentido contrario.

DECIMO TERCERO.- Por auto de veinte de abril de mil novecientos noventa y tres, se radicó en este Tribunal Superior el expediente número 441/93, ordenándose la notificación a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo y comunicándolo a la Procuraduría Agraria.

DECIMO CUARTO.- El dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, este Tribunal Superior emitió acuerdo para mejor proveer, para tal caso se giró el despacho número AC/169/93, determinando que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, con sede en Culiacán, Sinaloa, llevara a cabo investigación respecto

de la situación real que prevalece en el predio de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), notificándose a la propietaria en términos de los artículos 275 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, concediéndole un término de cuarenta y cinco días para que presentara pruebas y alegara lo que a su derecho conviniera.

El veinte de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en cumplimiento al despacho que antecede, el actuario del Tribunal Unitario Agrario, notificó el acuerdo de mérito a Ramón Durán Hernández, Adrián Hernández Gallardo y Martín Hernández Benítez, quienes se ostentaron como integrantes del Comité Particular Ejecutivo.

Asimismo, a través de acta circunstanciada de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, informó que se desconoce el domicilio de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez.

A esta acta acompañó documento de trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, mediante el cual el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, informó que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, no tiene su domicilio en esa municipalidad.

El veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, el actuario comisionado levantó acta circunstanciada, en la que manifiesta que se constituyó en las oficinas del Registro Público de la Propiedad del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, con el objeto de solicitar aclaración respecto de la inscripción de la propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, en virtud de que en el oficio 12/94, de ocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, el Oficial del Registro Público de la Propiedad, afirma que no se encontró registrada propiedad a nombre de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, empero, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se sabe que en el libro 20, de la sección primera, relativo a documentos públicos, el actuario constató que aparece registrada bajo la inscripción 47 la propiedad de la antes mencionada, anexando a su diligencia copia fotostática de la escritura número 1895, volumen LVIII, de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, del licenciado Fernando A. Orrantía, Notario Público con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en la que se hace constar que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, compró a Carlota Ibarra Burgueño viuda de Córdoba, la superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas).

DECIMO QUINTO.- Por escrito presentado el quince de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Ramón Durán Hernández, Adrián Hernández Gallardo y Martín Hernández Benítez, quienes se ostentaron como integrantes del Comité Particular Ejecutivo, presentaron las siguientes pruebas:

a).- Escrito de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en el que el Secretario del Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, hace constar que el predio propiedad de Martha Lilia Sarabia Palacios, no se encuentra explotado.

b).- Escrito de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en el que el Secretario del Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, hace constar que el poblado "Santa Efigenia" sí existe y se encuentra ubicado a una distancia de quince kilómetros de la Sindicatura de Dimas, Municipio de San Ignacio, se compone de cuarenta casas construidas de lámina de cartón, palma y madera, cuenta además con una escuela primaria, un templo y que el poblado se formó desde mil novecientos setenta y ocho.

c).- Escrito de seis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, mediante el que la autoridad municipal de la Comunidad denominada Toyhua, San Ignacio, Sinaloa, pretende hacer constar que el grupo solicitante de tierras que nos ocupa está en posesión de una superficie de 388-00-00 (trescientas ochenta y ocho hectáreas) propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez.

d).- Copia simple de escrito de diez de enero de mil novecientos setenta y nueve, mediante el que la Oficina de Recaudación de Rentas del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, hace constar que el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, se realizó el traslado de dominio de la compraventa que llevó a cabo Carlota Burgueño viuda de Córdoba, en favor de María Felipa Lozano Rodríguez, respecto de un lote con superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas).

e).- Copia simple de la escritura pública número 1895, de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, en la que consta el contrato de compraventa antes mencionado.

f).- Copia simple del plano informativo que dice muestra las 300-00-00 (trescientas hectáreas) que fueron señaladas como afectables por solicitantes del núcleo "Santa Efigenia" y las proyectadas para el poblado "La Chicayota Km. 1116".

DECIMO SEXTO.- El Tribunal Superior Agrario, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictó sentencia en el juicio agrario número 441/93, conforme a los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO.- Es procedente la dotación de tierras, promovida por campesinos del poblado denominado ‘Santa Efigenia’, ubicado en el Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.

SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota al poblado referido en el punto resolutivo anterior con una superficie total de 1,498-32-90 (mil cuatrocientas noventa y ocho hectáreas, treinta y dos áreas, noventa centiáreas), del predio denominado ‘Duranguito’, ubicado en el Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, que se tomarán de la siguiente manera: 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y una áreas, veintisiete centiáreas) de agostadero, con un 40% de temporal, propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, y 109-81-63 (ciento nueve hectáreas, ochenta y una áreas, sesenta y tres centiáreas) de agostadero, con un 35% de temporal, propiedad de Martha Lilia Palacios Sarabia, para beneficiar a cincuenta y un campesinos cuyos nombres se anotaron en el considerando segundo de esta sentencia, por haber permanecido inexploradas por más de dos años consecutivos y sin causas justificadas, en términos del artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicado en sentido contrario.

La superficie que se concede deberá localizarse conforme al plano proyecto que para tal efecto se elabore y pasará a ser propiedad del núcleo de población con todas sus accesiones, usos, servidumbres y costumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social, la asamblea resolverá de acuerdo con las formalidades y competencia que le confieren los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria, debiendo constituir el área de asentamientos humanos, la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud...”

Contra dicha sentencia, Herón Luis Rodríguez Aldaco en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando también como actos reclamados, todo lo actuado dentro del expediente relativo al juicio agrario número 441/93, desde la radicación de dicho expediente y particularmente desde el llamamiento a juicio que en forma defectuosa y violatoria de garantías se efectuó mediante edictos a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, como también los actos tendientes a ejecutar la resolución de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Del citado amparo, radicado bajo el número 273/98, conoció el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, quien al dictar sentencia el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la Justicia de la Unión amparó y protegió a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, al considerar que no fue emplazada en los términos que disponía la Ley Federal de Reforma Agraria.

La sentencia dictada en el citado amparo 273/98 fue confirmada en revisión por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito.

Por acuerdo plenario de primero de febrero de dos mil, el Tribunal Superior Agrario, en cumplimiento a la ejecutoria referida, dejó sin efectos todo lo actuado en el expediente del juicio agrario 441/93, relativo a la dotación de tierras al poblado “Santa Efigenia”, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, desde el auto de radicación hasta la sentencia definitiva emitida por el propio Tribunal el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, y sus consecuencias, únicamente por lo que se refiere a la superficie defendida por la quejosa; y a su vez, ordenó turnar el expediente al Magistrado instructor para que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad, se formulara el proyecto de sentencia correspondiente y se sometiera a la aprobación del pleno de este Tribunal Superior.

Por acuerdo complementario de trece de marzo de dos mil, y en cumplimiento a la ejecutoria en mención, se tuvo por radicada la acción de dotación de tierras promovida por el poblado de que se trata, por lo que respecta a la propiedad de la impetrante de garantías, ordenando se notificara este proveído a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, propietaria del predio denominado “Duranguito”, así como al Comité Particular Ejecutivo del núcleo solicitante, por conducto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en la ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa.

También en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en acuerdo de diecisiete de abril de dos mil, se ordenó girar despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, para que en auxilio de este Tribunal Superior, tomara las medidas pertinentes y notificara personalmente a Herón Luis Rodríguez Aldaco, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, la instauración del procedimiento de dotación de ejido promovida por campesinos del poblado de que se trata, requiriéndolo para que en el término de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la propia notificación, aportara pruebas y formulara los alegatos que a los derechos de su poderdante convinieran,

por cuanto a las tierras que defienden, denominadas "Duranguito", con el apercibimiento que de no hacerlo en tiempo y forma, se procedería de conformidad a derecho.

Una vez de haber sido debidamente cumplimentados los acuerdos que anteceden, mediante escrito presentado ante este Tribunal el siete de julio de dos mil, Herón Luis Rodríguez Aldaco, en su carácter de apoderado jurídico general de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, ofreció las pruebas que a su derecho convinieron y manifestó sus alegatos, respecto de la solicitud de dotación de ejido promovida por el núcleo de población denominado "Santa Efigenia", mismas que en el apartado de considerandos de esta resolución serán analizadas y valoradas.

En virtud que de entre las pruebas ofrecidas por Herón Luis Rodríguez Aldaco, se encuentra la testimonial, y que asimismo, en escrito presentado por dicha persona ante este Tribunal el treinta y uno de julio de dos mil, y por el cual amplió sus alegatos y ofreció también como prueba de su parte la confesional, por acuerdos de once de julio y siete de agosto de dos mil, se ordenó se girara despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en Mazatlán, Sinaloa, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Superior Agrario, proveyera lo necesario a fin de que se realizaran las diligencias necesarias que ameritaran la preparación y desahogo de dichas probanzas; y hecho lo anterior, devolvieran las respectivas constancias para estar en posibilidad de resolver lo procedente en el juicio agrario que nos ocupa.

Por oficio número 1384/2000, de once de septiembre de dos mil, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, devolvió a este Tribunal Superior debidamente diligenciado el despacho número DA/172/2000, en el que obran las constancias del desahogo de las pruebas antes referidas.

DECIMO SEPTIMO.- El veinte de octubre de dos mil, este Tribunal Superior dictó nueva sentencia en el juicio agrario 441/93, en los términos siguientes:

"PRIMERO.- Es inafectable el predio denominado 'Duranguito', ubicado en el Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y una áreas, veintisiete centiáreas), propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, atento en lo dispuesto por los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

SEGUNDO.- En consecuencia, es de negarse y se niega la dotación de ejido promovida por campesinos del poblado denominado 'Santa Efigenia', Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, sólo por cuanto hace al predio señalado en el punto resolutivo que antecede, que fue materia de estudio constitucional, quedando subsistente la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en lo que no fue materia de amparo...".

DECIMO OCTAVO.- En contra de la sentencia anterior, los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado "Santa Efigenia", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil uno ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, mismo que fue resuelto el veintiocho de junio de dos mil dos, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que la Justicia de la Unión ampara y protege al núcleo de población de referencia, para el efecto de que "...el Tribunal Superior Agrario, deje insubsistente el fallo reclamado y emita otra en la que valore todas las pruebas que se hayan aportado en el juicio y resuelva lo que en derecho proceda...".

Las consideraciones que se tomaron de base para dicha ejecutoria, son del tenor literal siguiente:

"...SEXTO.- De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa aduce que la sentencia reclamada violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, argumento que se analiza en suplencia de la queja, toda vez que en el caso que nos ocupa, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa es un núcleo de población ejidal...

...Precisado lo anterior, conviene destacar que de las constancias de autos del juicio agrario del que emana el acto reclamado, se observa que a efecto de acreditar la procedencia de la acción de dotación intentada, ofreció ante el Tribunal Superior Agrario, como pruebas de su parte, las siguientes:

1. Constancia expedida por el Secretario del Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se hace constar que en esa fecha no se encuentra en explotación el predio propiedad de Martha Lilia Palacio Sarabia.

2. Constancia expedida por el Secretario del Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se hace constar que en la Sindicatura de Dimas, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, existe el poblado de Santa Efigenia, su ubicación y medidas, asimismo, se hace constar que ese poblado se formó desde el año de mil novecientos setenta y ocho.

3. Constancia expedida por el Comisariado Municipal de Toyhua, Municipio de San Ignacio, el seis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se manifiesta que el grupo solicitante de tierras

denominado Santa Efigenia, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, está en posesión del predio con superficie de 388-00-00 hectáreas, propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra y que lo explotan desde el año de mil novecientos setenta y ocho, no así su propietaria no lo explota.

4. Copia simple del aviso de traslación de dominio de la que se advierte que el diez de enero de mil novecientos setenta y nueve, el Notario Público avisó al Recaudador de Rentas del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, que el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, la aquí tercero perjudicada compró el lote de terreno cuyas medidas y ubicación se indican.

5. Copia simple del primer testimonio de la escritura pública número un mil ochocientos noventa y cinco, otorgada por el Notario Público en el municipio de Mazatlán, de la que se desprende que la tercero perjudicada María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez compró a la señora Carlota Ibarra Burgueño viuda de Córdova, un predio rústico con superficie de un mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas y veintiséis centiáreas, ubicado en la Sindicatura de Dimas, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, el cual constituye la fracción número diecisiete de la división del predio denominado 'Duranguito'.

6. Plano informativo en el que se muestra las trescientas hectáreas del predio 'Duranguito' cuya dotación solicita el poblado aquí quejoso.

Ahora bien, de la lectura de la parte considerativa de la sentencia recurrida, la cual quedó transcrita con antelación, se advierte que después de que el Tribunal responsable valoró las pruebas que ofreció la aquí tercero perjudicada, así como el trabajo informativo emitido por la Ingeniera María Eugenia Cruz Pasos, el ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, concluyó en el sentido de que no existe causa alguna para declarar el certificado de inafectabilidad exhibido por la demandada (sic) y que por tanto, el predio de que se trata resultaba inafectable para satisfacer las necesidades del núcleo de población denominado 'Santa Efigenia'.

Asimismo, consideró que con ninguna de las constancias que obran en autos del expediente, se puede advertir que el predio en litigio no se haya explotado durante dos años consecutivos y que se dedique a un fin distinto.

Lo anterior, permite advertir que para arribar a la conclusión antes destacada, la autoridad responsable valoró únicamente las pruebas aportadas por la parte demandada en el juicio agrario, y omitió valorar las pruebas que ofreció el núcleo de población demandante, así como los trabajos informativos que obran en autos, pues se limitó a manifestar que 'con ninguna de las constancias que obran en el expediente en estudio' no se advertía que el predio materia de la litis no se hubiera explotado por más de dos años, sin que haya expresado el motivo por el cual, a su consideración, las pruebas que aportó la parte actora en el juicio agrario, así como los trabajos informativos elaborados por autoridades agrarias no eran aptas para acreditar la in explotación del terreno, proceder al que se encontraba constreñida por el artículo 189 de la Ley Agraria, el cual prevé lo siguiente:

'Artículo 189.- Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones'.

En efecto, de la lectura del precepto transcrito con antelación, se advierte que los Tribunales no se encuentran sujetos a las reglas para la apreciación de las pruebas; sin embargo, ello no las faculta a realizar un análisis parcial de las aportadas en el juicio, o a omitir las razones en que se apoyan para otorgarles o negarles valor probatorio a las ofrecidas, pues el propio precepto les impone la obligación de fundar y motivar sus resoluciones.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VII.A.T.J/13, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo criterio comparte este Tribunal, en la cual se encuentra visible en la página 336, tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto literal es el siguiente:

'PRUEBAS, ESTUDIO DE LAS, POR EL TRIBUNAL AGRARIO. Si bien es verdad que el artículo 189 de la Ley Agraria establece que las sentencias de los Tribunales Agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, no menos cierto es que ello no los faculta a omitir el análisis de las pruebas que aporten las partes'.

En ese orden de ideas, al omitir el Tribunal responsable valorar las pruebas aportadas por el núcleo de población demandante, así como los trabajos técnicos informativos elaborados por la autoridad agraria, debe considerarse que violó en su perjuicio su garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 Constitucional, pues ésta no se colma únicamente con la admisión de las pruebas de las partes, sino con su admisión,

desahogo y valoración, lo que como ya se dijo, en la especie no aconteció, pues omitió referirse de manera concreta a las pruebas documentales que ofreció la aquí quejosa en el juicio agrario.

Asimismo, la responsable transgrede en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, pues argumenta que de los trabajos informativos no se advierte la inexploración del predio materia de la litis, sin embargo, omite expresar las razones por las cuales arriba a esa conclusión, es decir deja de motivar esa determinación...”.

DECIMO NOVENO.- En cumplimiento a la ejecutoria antes referida, por acuerdo plenario dictado por este Tribunal Superior, el nueve de agosto de dos mil dos, se dejó parcialmente insubsistente la sentencia de veinte de octubre de dos mil, en el expediente del juicio agrario 441/93, únicamente por lo que hace al predio “DURANGUITO”; dejó firme la sentencia emitida el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, por el Tribunal Superior Agrario, en el mismo juicio, en la superficie que no fue materia del juicio de amparo; y ordenó turnar al Magistrado instructor los autos del citado juicio agrario, para que siguiendo los lineamientos de dicha ejecutoria, en su oportunidad formulara el proyecto de sentencia correspondiente, y lo sometiera a la aprobación del pleno de este Tribunal Superior, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- Como se escribió en el apartado de antecedentes de esta sentencia, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el veintiocho de junio de dos mil dos, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo número D.A. 7513/2001-376, promovido por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado denominado “Santa Efigenia”, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 80 de la Ley Agraria, el Tribunal Superior Agrario, por acuerdo de nueve de agosto de dos mil dos, dejó parcialmente insubsistente su sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil, en el expediente del juicio agrario 441/93, relativo a la solicitud de dotación de tierras del poblado de que se trata, únicamente por lo que hace al predio “Duranguito”, propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, y dejó firme su sentencia emitida el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en la superficie que no fue materia del juicio de amparo, por lo que este órgano jurisdiccional, en términos de la ejecutoria en referencia, emite la presente resolución, sólo en lo que fue materia de estudio por el órgano jurisdiccional, de conformidad al primero de los artículos citados; esto es, que se encuentra firme la afectación hecha al predio propiedad de Martha Lilia Palacios Sarabia, con una superficie de 109-81-63 (ciento nueve hectáreas, ochenta y un áreas, sesenta y tres centiáreas) de agostadero, con un 35% (treinta y cinco por ciento) de temporal.

TERCERO.- También como se señaló en antecedentes, en vía de cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el nueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, en el amparo indirecto 273/98, por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil, se ordenó notificar personalmente a Herón Luis Rodríguez Aldaco, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, la instauración del procedimiento de dotación de ejido promovida por campesinos del poblado de “Santa Efigenia”, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, requiriéndolo para que en el término de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la propia notificación, aportara pruebas y formulara los alegatos que a los derechos de su poderdante convinieran, por cuanto hace a las tierras que defienden, denominadas “Duranguito”.

Con base en lo anterior, y estando dentro del término concedido, por escrito presentado ante este Tribunal el siete de julio de dos mil, Herón Luis Rodríguez Aldaco manifestó que dado que su representada y el promovente estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal, ocurría también por su propio derecho a este procedimiento; señalando por otra parte, como alegatos, que el inmueble propiedad de ellos es inafectable, en los términos de la Constitución y la Ley Federal de Reforma Agraria, en atención a que se trata de una pequeña propiedad ganadera en explotación, que cuenta con certificado de inafectabilidad ganadera número 207104, expedido el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta, según acuerdo publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta, inscritos en el Registro Agrario Nacional bajo el número 3710 a foja 191, volumen 195, de veintiséis de junio de ese mismo año; inmueble que en todo tiempo ha estado en explotación, sin que jamás se haya tramitado instancia alguna para dejar sin efectos el mismo. Que el inmueble en cuestión fue adquirido a nombre de María Felipa de Jesús

Lozano Guerra de Rodríguez, por la sociedad conyugal que tienen constituida, mediante contrato de compraventa celebrado con Carlota Ibarra Burgueño viuda de Córdoba, el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, mediante escritura pública 1895, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en San Ignacio, Sinaloa, el treinta de enero de mil novecientos setenta y nueve, bajo la inscripción número 47, libro 20, sección I, de documentos públicos. Que durante el año de mil novecientos setenta y nueve, adquirieron ciento nueve cabezas de ganado bovino cebú, que constituyen el pie de cría, habiéndose adquirido hasta el año de mil novecientos ochenta y tres, un total de doscientas treinta y un cabezas de ganado de la misma raza, y que cercaron el inmueble con alambre de púas de cuatro hilos y postas de madera, que también se construyeron cercos internos, corrales de manejo y un baño garrapaticida, se abrieron caminos y brechas a lo largo de los cercos, siendo que desde su adquisición, han mantenido la explotación al cuidado de diversos trabajadores, por lo que en ningún momento se ha abandonado la explotación del rancho, ya que desde su adquisición se ha estado vendiendo ganado y comprando sementales, invirtiendo en mantenimiento de cercos y corrales, habiéndose cubierto los impuestos prediales y toda clase de cargas fiscales motivadas por la explotación del rancho en cuestión. También indica que en ninguna de las diligencias relativas a trabajos técnicos informativos que obran en el expediente, se le dio intervención, habiendo sido practicadas a "sus espaldas", por lo que carecen de todo valor probatorio, y advierte además que en ninguno de dichos estudios se precisa que su predio hubiese estado inexplorado por más de dos años. Por otra parte manifiesta, que dentro del expediente número 415/97, relativo a la solicitud de dotación presentada por el núcleo de población denominado "El Pozole", Municipio de San Ignacio, Sinaloa, en el cual también fue señalado su predio ganadero como afectable, este mismo Tribunal Superior Agrario dictó sentencia el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, en cuyo considerando cuarto declaró inafectable su predio, por tratarse de una pequeña propiedad ganadera en explotación, con base en que dentro del mismo, se practicó un estudio técnico el once de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, en cumplimiento del oficio número 1975 de veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, girado por la Consultoría adscrita a la Sala Regional del Cuerpo Consultivo Agrario, en el que se constató que su predio se dedica a la ganadería. Que desde el diez de julio de mil novecientos setenta y nueve, la Secretaría de Finanzas del Estado de Sinaloa, otorgó el registro número SI-1215 a favor de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, correspondiéndole el fierro identificado con el mismo número, además que también su representada se encuentra inscrita en la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, Sinaloa, desde el seis de abril de mil novecientos setenta y nueve, con el registro número 831/1235/SI-1215, encontrándose hasta la fecha al corriente en el pago de las cuotas de dicha asociación, teniendo más de veinte años explotando en forma ininterrumpida el inmueble en unión de su esposo y apoderado, estando además registrada como socia bajo el número 633, de la Asociación Ganadera de Criadores de Cebú en la República Mexicana, con fecha de ingreso de treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y uno. Advierte también que la solicitud del núcleo petionario se inició el cinco de abril de mil novecientos ochenta y dos, y que el certificado de inafectabilidad ganadera mencionado, se expidió el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta, siguiéndose explotando su predio hasta la fecha. Considera importante señalar que el núcleo de población petionario, jamás ha estado en posesión material del inmueble de su propiedad, pues fue hasta la diligencia de toma de posesión practicada en cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal Superior el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, y que fuera practicada del veintiséis al treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y ocho, que se les dio posesión jurídica y material, pero que ésta no la han tenido en forma plena, pues sólo algunas personas que suponen pertenecen al grupo petionario, procedieron entrar al predio a cortar madera, y algunos construyeron dos o tres chozas que habitan eventualmente, y que sin embargo, el ganado tanto del promovente como de su esposa, sigue pastando en el predio, sus trabajadores realizan sus labores normales de atención al ganado y mantenimiento general de los cercos.

Para acreditar su dicho, en el mismo escrito aportó pruebas, a las que se les hace el siguiente análisis y valoración.

Con la documental consistente en el recibo número 226354, de seis de abril de mil novecientos setenta y nueve, se acredita que la Tesorería Municipal de San Ignacio, Sinaloa, recibió de María Felipa de Jesús Lozano, la cantidad de \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de impuestos con respecto al certificado de residencia como ganadera del citado municipio.

Con el oficio número 019/84 de diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se conoce que el Director de Alimentación Pecuaria de la Secretaría de Alimentos, Productos y Servicios Esenciales, le solicitó a María Felipa de Jesús Lozano que enviara su existencia de ganado en venta y el precio del mismo, para que la citada dependencia a su vez pudiera proponerlo a la persona que lo solicitara, en virtud de

que se pretendía establecer una sesión denominada "Bolsa Ganadera", con la intención de ayudar al ganadero a promover sus ventas.

Con el escrito de quince de mayo de dos mil, signado por el Presidente de la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, Sinaloa, se conoce que la citada persona manifiesta que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez es socia activa de dicha asociación, desde el seis de abril de mil novecientos setenta y nueve, con registro número 831/1235/SI-1215, ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Sinaloa, quien en compañía de su esposo Herón Luis Rodríguez Aldaco, se dedica, posee y cría un hato de aproximadamente doscientas cabezas de ganado bovino de raza cebú, el cual ha pastoreado ininterrumpidamente hasta la fecha, en su rancho de nombre "El Reloz", ubicado en la fracción del lote número 17 del predio rústico "Duranguito", con superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y una áreas, veintiséis centiáreas), y con fierro de herrar semovientes, registrado a su nombre bajo el número I-1215 ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Sinaloa; y que su predio cuenta con el certificado de inafectabilidad ganadera número 207104, expedido a nombre de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez y Herón Luis Rodríguez Aldaco, el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta.

Con el escrito de doce de julio de mil novecientos noventa y uno, firmado por Luis Peña Farber, quien se dice ser apoderado general para pleitos y cobranzas de Herón Luis Rodríguez Aldaco y María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, se conoce que pidió al Subprocurador de Justicia del Estado, zona sur, que desalojara a unos invasores de las propiedades de sus representados, y que investigara los hechos atentatorios de sus derechos e intereses hasta su completo esclarecimiento, y que consisten en que la persona de nombre Espectación Rodríguez Sandoval, quien realiza labores de campo y de vigilancia en el predio denominado "Duranguito" o "El Reloz", reportó que al supervisar el ganado y revisar los cercos, observó en diferentes ocasiones la incursión en los terrenos de dos o tres individuos que no reconoció como vecinos del lugar, haciendo trabajos de limpia y preparación de tierra, al parecer para sembrarla; y que al llevarse a cabo la investigación solicitada, sólo encontraron un campamento rústico habitado por trabajadores de la obra de la carretera denominado "Costera", quienes señalaron que trabajaban para la Constructora denominada "I.C.A.", por lo que se llegó a la conclusión que no existía indicio alguno que en el rancho "El Reloz" estuviera asentado algún grupo de personas con carácter de invasión.

Con la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, en el juicio agrario número 415/97, integrado con motivo de la solicitud de dotación de tierras promovida por un grupo de campesinos del poblado "El Pozole", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, se llega al conocimiento, en lo que interesa, que mediante oficio número 657 de dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, el Cuerpo Consultivo Agrario solicitó la realización de trabajos complementarios, mismos que fueron practicados el dieciocho de julio de ese mismo año, y en los que se asentó, que en las inspecciones oculares se investigó el lote de terreno de agostadero propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, indicándose que en dicho terreno sólo pasta ganado en la época de lluvias, debido a las condiciones climatológicas que privan en la región, y que se encuentra delimitado por cercos y alambre de púas y postes de madera, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de San Ignacio, Sinaloa, bajo el número 47, del libro 20, sección I. Y que mediante oficio número 1975, de veintidós de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, la Consultoría adscrita a la Sala Regional del Cuerpo Consultivo Agrario, solicitó la realización de trabajos técnicos e informativos complementarios, para mejor proveer, mismos que fueron realizados, rindiéndose el informe correspondiente el once de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, en el que se consigna que el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y una centiáreas, veintisiete áreas) (sic), ubicado en el predio "Duranguito", Municipio de San Ignacio, se dedica a la ganadería, y que está cercado con alambre de púas de cuatro hilos. Asimismo, se conoce que este Tribunal Superior Agrario, en la citada sentencia, señaló que de las actuaciones que obran en el expediente, pequeñas propiedades, entre las que se encuentra la de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, por su naturaleza resultan inafectables en términos de lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria; habiendo sido afectadas para satisfacer las necesidades del citado núcleo de población solicitante, diversas propiedades que en un total suman 458-14-86 (cuatrocientas cincuenta y ocho hectáreas, catorce áreas, ochenta y seis centiáreas), y que corresponden a los predios de Evangelina Palacios Sainz, Candelario Gárate Noriega y Martín Ozuna Ramírez.

Con la documental consistente en copia certificada del primer testimonio del instrumento público levantado el primero de junio de mil novecientos noventa y ocho, por el notario público titular de la Notaría Pública número 37, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se acredita la personalidad con que

actúa en el presente juicio Herón Luis Rodríguez Aldaco, en virtud del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y cambiario que le confirió María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez.

Con las certificaciones del Registro Civil que obran a fojas 340, 341 y 342, sólo se acredita que el veintiuno de junio de mil novecientos cuarenta, nació María Felipa de Jesús Lozano Guerra; que Herón Luis Rodríguez Aldaco y María Felipa de Jesús Lozano Guerra contrajeron matrimonio el veintitrés de abril de mil novecientos sesenta y ocho, y que Herón Luis Rodríguez Aldaco nació el diecinueve de agosto de mil novecientos treinta y nueve.

Con la escritura pública levantada el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, por el notario público del Estado de Sinaloa, con ejercicio en el Municipio de Mazatlán, se acredita que Carlota Ibarra Burgueño viuda de Córdova, vendió a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez un lote de terreno rústico con superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas), ubicado en la Sindicatura de Dimas, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, que constituye la fracción del lote número 17 de la división del predio denominado "Duranguito"; y que el citado contrato de compraventa quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Ignacio, Sinaloa, el treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y nueve, bajo la inscripción número 47, del libro número 20, sección I.

Con la certificación número 483183, del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del Estado de Sinaloa, de quince de mayo de dos mil, se acredita que no se encontró ningún gravamen constituido sobre el predio denominado "Duranguito", con una superficie de 1,388-41-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cuarenta y un áreas, veintiséis centiáreas) (sic), propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez.

Con la declaración de impuesto predial rústico municipal, se conoce que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, el quince de mayo de dos mil, pagó el citado impuesto durante el periodo 1/1999 al 4/2000, respecto a su predio rústico, ubicado en "Est. Dimas", San Ignacio, Sinaloa.

Con la copia certificada del certificado de inafectabilidad ganadera número 207104, expedido el dieciséis de julio de mil novecientos ochenta, se comprueba que el mismo ampara el predio denominado "Duranguito", ubicado en el Municipio de San Ignacio, Sinaloa, copropiedad de María Felipa de Jesús Guerra de Rodríguez y Herón Luis Rodríguez Aldaco, con superficie de 1,487-51-26 (mil cuatrocientas ochenta y siete hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas) de agostadero de buena calidad, de conformidad con el acuerdo de inafectabilidad dictado el dieciocho de abril de mil novecientos ochenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el veintiuno de mayo de ese mismo año. Asimismo, con la documentación que se anexa al citado certificado de inafectabilidad, consistente en la escritura de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, antes analizada, y con la que se llegó al conocimiento que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, compró el terreno rústico con superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas), que constituye la fracción del lote número 17 de la división del predio denominado "Duranguito"; y con la escritura levantada el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, ante el notario público del Estado, con ejercicio en el Municipio de Mazatlán, de la que se desprende que Herón Luis Rodríguez Aldaco compró a Ana María Valenzuela Córdova un lote de terreno rústico que es fracción del lote número 7 de la división del predio denominado "Duranguito", ubicado en la Sindicatura de Dimas, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, con superficie de 99-00-00 (noventa y nueve hectáreas), se infiere que en dicho certificado de inafectabilidad ganadera se ampararon estas dos propiedades, ya que sumadas las superficies que adquirieron María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez y Herón Luis Rodríguez Aldaco dan un total de 1,487-51-26 (mil cuatrocientas ochenta y siete hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas).

Con el título número 33122, expedido el diez de julio de mil novecientos setenta y nueve, por la Secretaría de Finanzas del Estado de Sinaloa, sólo se acredita que María Felipa de Jesús Lozano de Rodríguez, durante el citado año fue propietaria de un fierro para herrar semovientes, y que el citado título quedó registrado bajo el número SI-1215, según solicitud de registro de fierro con el mismo número, correspondiente a la asociación ganadera del Municipio de San Ignacio; lo anterior, en virtud de que en el mismo título señala que sólo sería válido durante el año de su expedición, debiendo revalidarse dentro de los meses de enero y febrero de cada año.

Con los cinco recibos que obran a fojas 371 a 373, expedidos en diversas fechas, por la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, Sinaloa, se conocen los pagos realizados por María de Jesús Lozano de Rodríguez, por concepto de cuotas anuales correspondientes a los años de mil novecientos setenta y nueve,

mil novecientos ochenta y uno a mil novecientos ochenta y cuatro, mil novecientos ochenta y ocho a mil novecientos noventa, mil novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y nueve y dos mil.

Con la copia certificada de la constancia expedida en el mes de enero de mil novecientos ochenta y dos, por el presidente y el secretario de la Asociación Ganadera de Criadores de Cebú en la República Mexicana, se conoce que María de Jesús Lozano, había sido miembro activo de esa asociación desde el tres de julio de mil novecientos ochenta y uno, teniendo como número de socio el 633.

Con los ciento cuarenta y tres certificados de registro de ganado, expedidos por la Asociación Ganadera de Criadores de Cebú en la República Mexicana, con fechas once de agosto de mil novecientos ochenta y uno, nueve de febrero, seis y once de mayo de mil novecientos ochenta y dos, y veinte y veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, se llega al conocimiento que el criador de dicho ganado es María de Jesús Lozano, del rancho "Reloz", ubicado en el Municipio de San Ignacio, Sinaloa.

Con la constancia expedida el diecinueve de junio de dos mil, por el Presidente Municipal Constitucional de San Ignacio, Sinaloa, se llega al conocimiento, que la citada persona manifiesta que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, según antecedentes que obran en los archivos de esa municipalidad, es propietaria de una fracción del predio rústico "Duranguito", con superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas), ubicado en la Sindicatura de Dimas de dicho Municipio, y que en ese lugar tiene establecido, en compañía de su esposo Herón Luis Rodríguez Aldaco, un rancho ganadero donde han mantenido a través de los últimos veinte años, en forma ininterrumpida, su pie de cría con más de ciento cincuenta vientres de ganado bovino en su rancho denominado "El Reloz".

Con la certificación expedida el quince de julio de mil novecientos ochenta y uno, por el síndico propietario de la Sindicatura de Dimas, San Ignacio, se conoce que la citada persona manifestó que los predios propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez y Herón Luis Rodríguez Aldaco, ubicados en el predio "Duranguito", se encontraron en ese año en plena producción agrícola y ganadera, predios cercados perimetralmente con cuatro hilos de alambre de púas, con caminos de acceso, casas y aperos de labranza, ganado vacuno y en plena posesión física y jurídica de sus propietarios.

Con el escrito signado por el Síndico Municipal de Estación Dimas, San Ignacio, Sinaloa, se conoce que dicha persona manifiesta que el quince de junio de mil novecientos noventa y ocho, se presentó ante él, el licenciado Eduardo Escutia Zúñiga, en representación de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, y que una vez de haber acreditado una propiedad con escritura número 1895, de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, y exhibir una fe notarial respecto de un terreno rústico con superficie de 1,388-00-00 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas), ubicada dentro del predio "Duranguito", le solicitó que lo acompañara al citado lugar, siendo que una vez de haberse presentado en el mismo, observó "un inmenso" terreno cercado a su alrededor con instante de madera de alambre de púas, fraccionado en su interior con cercos del mismo material; que asimismo, se encontraron dentro de dichos terrenos varias cabezas de ganado pastoreando, así como un baño garrapaticida y dos trabajadores haciendo las labores del campo, de nombres Reynaldo Torres Pérez y Espectación Rodríguez Sandoval, quienes manifestaron al Síndico Municipal que el primero de ellos tiene más de tres años de trabajar en la citada propiedad, y que el segundo lo hace desde el año de mil novecientos ochenta y dos.

Con las treinta y un facturas que obran a fojas 521 a 552, se conoce que María Felipa de Jesús Lozano y sucesores realizaron compra de ganado en los años de mil novecientos setenta y ocho a mil novecientos ochenta y tres, a la Compañía Ganadera "Las Cabras" S. de R.L., Sergio Escutia Monroy, Corrales del Sur, S. de R.L., Héctor Escutia Monroy, Sergio Escutia Zúñiga, Héctor Escutia Castro y Angelina Monroy Ruiz.

Con las facturas expedidas por "Metalek", Sociedad Anónima de Capital Variable, el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno, sólo se llega al conocimiento que el licenciado Herón Rodríguez, compró alambre de púas de treinta y cuatro kilogramos y grapa galvanizada.

Con las catorce facturas que obran a fojas 554 a 569, y con la guía de tránsito comercial número 833379 de la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, expedida el seis de junio de mil novecientos ochenta y cinco, y en la que aparece como vendedora María de Jesús Lozano de Rodríguez, se conoce que María de Jesús Lozano de Rodríguez, "Ganadería" Estación Dimas, San Ignacio, Sinaloa, y el "Rancho El Reloz", Ganadería-Agricultura-Silvicultura, licenciado Herón L. Rodríguez Aldaco, han llevado a cabo diversas ventas de ganado a diversas personas, durante los años de mil novecientos ochenta y cinco, mil novecientos noventa, mil novecientos noventa y uno, mil novecientos noventa y tres, mil novecientos noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve y dos mil.

Con la constancia expedida el seis de junio de mil novecientos ochenta y cinco, por la Inspección de Ganadería de la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, Sinaloa, se conoce que en el predio propiedad de Herón Rodríguez, se encontró un baño garrapaticida y cien cabezas de ganado bovino bañadas.

Con los contratos individuales de trabajo por tiempo indeterminado, celebrados el dos de mayo de mil novecientos noventa y cuatro y el quince de marzo de mil novecientos noventa y siete, se llega al conocimiento que Asención Rodríguez Saldoval y Reynaldo Torres Pérez, fueron contratados, respectivamente, en las fechas señaladas como trabajadores del licenciado Herón L. Rodríguez Aldaco, en su carácter de propietario del rancho ganadero "El Reloz", para realizar trabajos de campo en el citado rancho.

Las probanzas anteriormente analizadas tienen valor probatorio con fundamento en los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

La testimonial de Raymundo Munguía Chávez, Manuel Astorga Medina, Vidal Osuna Osuna y Reynaldo Torres Pérez, tiene valor probatorio, con fundamento en los artículos 197 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que dichos testigos convinieron en lo esencial al declarar que conocen a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez y a Herón Luis Rodríguez Aldaco; que conocen el rancho "El Reloz", ubicado en el predio "Duranguito" de la Sindicatura de Dimas, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, que el citado rancho tiene una superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas) y el cual desde hace veinte años se ha explotado para la cría de ganado.

La confesional de los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado "Santa Efigenia", no es de tomarse en consideración atento a lo dispuesto por los artículos 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud que lo manifestado por las citadas personas en nada los perjudica.

Ahora bien, en estricto cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el veintiocho de junio de dos mil dos, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo D.A. 7513/2002-376, es de señalarse que, como también se vio en el apartado de resultandos de esta sentencia, por escrito presentado el quince de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Ramón Durán Hernández, Adrián Hernández Gallardo y Martín Hernández Benítez, quienes se ostentaron como integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado "Santa Efigenia", Municipio de San Ignacio, Sinaloa, ofrecieron pruebas, a las que se les hace el siguiente análisis y valoración:

Con la documental consistente en una constancia expedida el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por el encargado del despacho de la Secretaría del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, sólo se conoce que dicha persona indicó que el predio propiedad de Martha Lilia Palacios Sarabia "...actualmente no se encuentra en explotación de ningún tipo..."; constancia que no surte efectos jurídicos en el caso, toda vez que no se refiere al predio materia de esta sentencia, propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez; lo anterior con apoyo en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Con la constancia expedida el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por el encargado del despacho de la Secretaría del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, en la que manifiesta que se constató que el poblado de "Santa Efigenia" se formó desde el año de mil novecientos setenta y ocho, haciendo referencia, asimismo, a su ubicación y de la forma en que está integrado, no se desprende la inexploración del predio en cuestión, ni alguna otra causal para la procedencia de la afectación del mismo; también, en relación con dicha probanza, es de señalarse, que en el caso, no existe la incertidumbre respecto de la existencia o no del citado poblado.

Las "constancias" expedidas el seis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, por el Comisario Municipal "De la Comunidad de N.C.P.E", cuyo nombre se encuentra ilegible en el sello, y en las que manifiesta que el grupo solicitante de tierras denominado "Santa Efigenia", está en posesión del predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con superficie de mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, explotándolo con la extracción de madera, por lo que la citada propietaria no lo explota; con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles son de desestimarse, toda vez que además de que tales manifestaciones no se corroboran con los demás elementos de prueba aportados por las partes, ni con las constancias que obran en autos, esas "constancias" no son suficientes para acreditar la posesión en materia agraria, con base, por analogía, con las jurisprudencias 202 y 342, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 145 y 249, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, y que establecen lo siguiente:

"CERTIFICACIONES OFICIALES. NO TIENEN EFICACIA PROBATORIA SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA POSESION EN MATERIA AGRARIA. La Suprema Corte de Justicia ha sentado

jurisprudencia en el sentido de que las certificaciones expedidas por las autoridades sobre asuntos ajenos a sus funciones no tienen ningún valor jurídico, y para utilizar su dicho en lo que no se refiere a dichas funciones, es preciso promover la prueba testimonial con arreglo a derecho (tesis número 59 pág. 105, octava parte de la compilación 1917-1975). En el caso de la existencia en autos de una certificación oficial, como lo es la que expide un presidente municipal, aun en el supuesto de que tuviera algún valor probatorio, no tiene eficacia para acreditar la posesión especialmente caracterizada a que se refieren los artículos 66 del Código Agrario abrogado y 252 de la vigente Ley Federal de Reforma Agraria”.

“POSESION, PRUEBA DE LA. LA CONSTANCIA QUE AL EFECTO EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL CARECE DE VALOR. La certificación de un Presidente Municipal en que hace constar que una persona se encuentra en posesión de determinado predio, no es prueba idónea para demostrar la citada posesión, por ser ésta una cuestión del todo ajena a sus funciones”.

Por otro lado, es de indicarse que como se vio de las pruebas aportadas por el apoderado legal de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, particularmente de las que se hace mención dentro del escrito de doce de junio de mil novecientos noventa y uno, signado por el apoderado general de Herón Luis Rodríguez Aldaco y María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, se llegó al conocimiento, que al realizarse una investigación en el predio denominado “Duranguito” o “El Reloz”, no se encontró indicio alguno, de que en el mismo estuviera asentado algún grupo de personas con carácter de invasión.

A la copia fotostática simple de la escritura pública levantada el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, por el notario público del Estado de Sinaloa, con ejercicio en el Municipio de Mazatlán, misma que adminiculada con la documental aportada por Herón Luis Rodríguez Aldaco que corresponde precisamente a tal escritura, y que fuera analizada en párrafos anteriores, se le otorga valor probatorio, con fundamento en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con lo que se acredita, que Carlota Ibarra Burqueño viuda de Córdoba, vendió a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez un lote de terreno rústico con superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas), ubicado en la Sindicatura de Dimas, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, que constituye una fracción del lote número 17 de la división del predio denominado “Duranguito”; y que el citado contrato de compraventa quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Ignacio, Sinaloa, el treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y nueve, bajo la inscripción número 47, del libro número 20, sección I.

La copia fotostática del plano que obra a foja 82, y que se dice ser corresponde a una fracción del predio “Duranguito”, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, solamente se toma como un elemento ilustrativo de la superficie que conforma la propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas), ya que adminiculado con el diverso plano que obra a foja 83, se puede apreciar que también aparece la misma superficie; sin embargo, es de señalarse que con el último plano mencionado, en el que se indica “que muestra las 300-00-00 Has., señaladas por el grupo Santa Efigenia y las proyectadas para el poblado La Chicayota”, en realidad no se pueden apreciar las citadas 300-00-00 (trescientas hectáreas); siendo que tales medios de prueba, tampoco aportan elemento alguno con el que se acredite la afectabilidad del predio que defiende María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez.

Por otra parte, y también en estricta observancia de la ejecutoria que se cumplimenta, es de señalarse que al analizar los diversos trabajos que se llevaron a cabo durante la sustanciación del procedimiento de dotación de tierras que nos ocupa, en los predios que se localizan dentro del radio de afectación del poblado en cuestión, tenemos que, por lo que hace a los practicados por el ingeniero Jaime Hugo López Gutiérrez, quien rindió su informe el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, y que fue transcrito en el resultando cuarto de esta sentencia, no aportan elemento alguno por el que se pueda conocer si el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, se encontró inexplorado o no, ya que como se puede observar del mismo, que se tiene por reproducido en obvio repeticiones innecesarias, el citado comisionado no hizo referencia alguna a dicho predio.

Del informe que rindiera María Eugenia Cruz Pasos, el ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, mismo que fue transcrito, en lo que interesa al caso, en el resultando noveno de esta sentencia, se conoce que el lote de terreno propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con una superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), se encontró utilizado como agostadero enmontado, así como delimitado por cerco de alambre de púas y postes de madera.

Como se ve de lo anterior, éste es el único informe que hace referencia respecto del predio en cuestión, ya que los restantes trabajos efectuados durante el desarrollo del procedimiento, fueron con el objeto de verificar

la verdadera existencia del poblado, como se puede observar en el apartado de antecedentes de esta sentencia; trabajos todos que aun cuando tienen pleno valor probatorio, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por haber sido elaborados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, lo cierto es que para el caso, sólo es de tomarse en cuenta el realizado por María Eugenia Cruz Pasos, para poder resolver en términos del artículo 189 de la Ley Agraria, ya que como se dijo con anterioridad, es el único que aporta informes respecto del multicitado predio, sin que con los demás se advierta la in explotación del terreno cuestionado.

CUARTO.- Teniendo en consideración que con ninguno de los trabajos a que se hace referencia con anterioridad, ni con las pruebas aportadas por quienes dijeron ser integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado "Santa Efigenia", se desprende que el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, se encuentra dentro de las hipótesis señaladas por la Ley Federal de Reforma Agraria para que pueda ser afectado, sino que por el contrario, con el informe rendido el ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, por María Eugenia Cruz Pasos, se conoce que el lote de terreno en cuestión, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), se encontró utilizado como agostadero, delimitado con cerco de alambre de púas y postes de madera; que asimismo, con las pruebas aportadas por Herón Luis Rodríguez Aldaco en su carácter de apoderado legal de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, se acredita que el predio de referencia, denominado "Duranguito" o "Rancho El Reloz", se ha dedicado constantemente a la explotación de ganado mayor; e incluso, con la documental consistente en la sentencia dictada por este Tribunal Superior, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, en el juicio agrario número 415/97, integrado con motivo de la solicitud de dotación de tierras promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "El Pozole", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, se conoce que durante la realización de los trabajos técnicos e informativos, particularmente de los llevados a cabo el dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y ocho, se indicó que el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, se dedica para pastar ganado sólo en la época de lluvias, debido a las condiciones climatológicas que privan en la región, habiéndose encontrado delimitado por cerco de alambres de púas y postes de madera; y del informe de once de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, se desprende que el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), se dedica a la ganadería, siendo que por lo anterior, el predio de que se trata resultó inafectable para satisfacer las necesidades agrarias del poblado mencionado.

Además de lo anterior, al estar acreditado que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez es propietaria del predio en mención, adquirido el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, por compra hecha a Carlota Ibarra Burqueño viuda de Córdoba, es decir, antes de la fecha de la instauración y publicación de la solicitud de dotación de tierras hecha por el núcleo de población de que se trata; que dicho predio, conjuntamente con el de la propiedad de Herón Luis Rodríguez Aldaco y que sumados hacen una superficie total de 1,487-51-26 (mil cuatrocientas ochenta y siete hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas) de agostadero de buena calidad, se encuentra amparado con el certificado de inafectabilidad ganadera número 207104, expedido el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta, de conformidad con el acuerdo de inafectabilidad dictado el dieciocho de abril de mil novecientos ochenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de veintiuno de mayo de ese mismo año; que asimismo, no existe causal alguna por la cual pudiera declararse la nulidad y cancelación de dichos acuerdos y certificado de inafectabilidad, por no encontrarse en ninguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en virtud de que la superficie que ampara el citado certificado de inafectabilidad ganadera no rebasa la superficie señalada como máximo inafectable, de acuerdo con las equivalencias del diverso artículo 250 de la misma ley, ya que inclusive, del estudio técnico practicado en el año de mil novecientos noventa y cuatro, donde se precisa la condición y tipo de explotación de los recursos naturales realizados por la Comisión Técnica Consultiva de Coeficientes de Agostadero dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con una superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), se conoce que su coeficiente de agostadero es de 6.26 (seis punto veintiséis hectáreas) por unidad animal, que multiplicadas por quinientos que serían las cabezas de ganado mayor que no deben de exceder para su manutención en una pequeña propiedad, como así lo dispone la fracción IV del artículo 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria, dan un total de 3,130-00-00 (tres mil ciento treinta hectáreas), con lo que precisamente se concluye que dicho predio no rebasa la pequeña propiedad inafectable.

Por otra parte, y como ya se mencionó, con ninguna de las constancias que obran en el expediente en estudio, se puede advertir que el predio en cita no haya sido explotado durante dos años consecutivos, como tampoco obra constancia alguna de que el mismo se haya dedicado a un fin distinto del señalado en el certificado.

En virtud de las apuntadas consideraciones, este Tribunal Superior llega a la conclusión que conforme a los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), resulta inafectable para satisfacer las necesidades agrarias del núcleo de población denominado "Santa Efigenia", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 76 y 80 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el veintiocho de junio de dos mil dos, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es inafectable el predio denominado "Duranguito", ubicado en el Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, atento a lo dispuesto por los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

SEGUNDO.- En consecuencia, es de negarse y se niega la dotación de ejido promovida por campesinos del poblado denominado "Santa Efigenia", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, sólo por cuanto hace al predio señalado en el punto resolutivo que antecede, que fue materia de estudio constitucional, quedando subsistente la sentencia dictada por este Tribunal Superior el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en lo que no fue materia de amparo.

TERCERO.- Publíquense: esta resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribáse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva; asimismo, inscribáse en el Registro Agrario Nacional el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta sentencia.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Sinaloa, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría de la Reforma Agraria; ejecútese, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

QUINTO.- Comuníquese al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada el veintiocho de junio de dos mil dos, en el juicio de amparo D.A.7513/2001-376.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a dieciocho de septiembre de dos mil dos.- El Magistrado Presidente, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Luis Octavio Porte Petit Moreno, Rodolfo Veloz Bañuelos, Marco Vinicio Martínez Guerrero, Luis Angel López Escutia**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Humberto Jesús Quintana Miranda**.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 344/97, relativo a la dotación de tierras, promovido por campesinos del poblado La Florida, Municipio de Múzquiz, Coah.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 344/97, que corresponde al expediente administrativo 1726, relativo a la solicitud de dotación de tierras promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "La Florida", ubicado en el Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila, y en cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve en el juicio de amparo 113/98, así como a la de dieciséis de junio de dos mil en el juicio de amparo 98/99, respectivamente, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito de tres de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, un grupo de campesinos radicados en el poblado denominado "Florida" del Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila, elevó ante el Gobernador del Estado de referencia, solicitud de dotación de tierras para satisfacer sus necesidades agrarias, señalando como predio susceptible de afectación el denominado "La Florida", ubicado en el mismo municipio y estado, propiedad de Miguel Múzquiz.

SEGUNDO.- La solicitud de referencia fue turnada a la Comisión Agraria Mixta del Estado de Coahuila, la que procedió a la instauración de la referida solicitud y del procedimiento administrativo el trece de diciembre de mil novecientos sesenta y uno, registrándolo bajo el número de expediente 1726.

TERCERO.- La solicitud de referencia fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.

CUARTO.- En la propia solicitud, los solicitantes propusieron para ocupar los cargos de presidente, secretario y vocal del Comité Particular Ejecutivo a Silvestre Soria Castillo, Gregorio Ruiz G. y Jesús Navarro, respectivamente, a quienes el Gobernador del Estado, mediante oficios números 396, 397 y 398, de trece de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, les expidió los nombramientos correspondientes.

QUINTO.- El censo agrario fue realizado por el comisionado Sergio de la Barrera B. quien rindió su informe el dieciséis de enero de mil novecientos sesenta y tres, haciendo saber los siguientes resultados: 146 habitantes; 35 jefes de hogar; 16 solteros mayores de 16 años y 51 campesinos con capacidad agraria individual, según la junta censal.

SEXTO.- En sesión efectuada el diez de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, la Comisión Agraria Mixta aprobó dictamen declarando improcedente la solicitud de dotación de tierras, por no satisfacer el poblado solicitante, los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 51 del Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos, vigente entonces, correlativo al artículo 196 fracción II de la Ley Federal de Reforma Agraria de aplicación supletoria; pues de los cincuenta y un campesinos considerados con capacidad agraria individual, por la junta censal, dicha Comisión Agraria excluyó a treinta y siete, por no satisfacer los requisitos establecidos por la fracción III del artículo 54 del Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos, vigente entonces, correlativo de la fracción III del artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, dejando con sus derechos a salvo a catorce campesinos que restaban.

SEPTIMO.- El Gobernador del Estado dictó mandamiento el once de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, en los términos propuestos en el dictamen de la Comisión Agraria Mixta, el que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 82, tomo LXXV de doce de octubre de mil novecientos sesenta y ocho.

OCTAVO.- Por oficio número 5392, de dieciséis de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, el Presidente de la Comisión Agraria Mixta, designó a Raúl Pineda Castañeda, a efecto de que practicara nuevo levantamiento censal de población, quien rindió su informe el dieciséis de enero de mil novecientos sesenta y nueve, proporcionando los siguientes resultados: 197 habitantes; 42 jefes de hogar; 41 solteros mayores de 16 años; 35 casados con derecho; 7 viudas y 83 capacitados, según la junta censal.

NOVENO.- El delegado agrario en la entidad, previo resumen del expediente, elaboró opinión en la cual propuso confirmar en todas y cada una de sus partes el mandamiento del Gobernador del Estado; y por oficio sin número de veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, turnó las actuaciones al Cuerpo Consultivo Agrario.

DECIMO.- En atención al acuerdo del Cuerpo Consultivo Agrario, de catorce de junio de mil novecientos setenta, el Delegado Agrario en el Estado mediante oficio 3740, de siete de agosto de mil novecientos setenta y cuatro encomendó a Jorge Macedo García, la realización de trabajos técnicos informativos complementarios, quien rindió su informe el veintiocho de noviembre del mismo año, en el que da cuenta de lo siguiente en relación con los predios investigados:

El comisionado manifiesta que dentro del radio legal de afectación se localizan diversos ejidos cuyas tierras resultan inafectables por encontrarse inmersas dentro del régimen de propiedad ejidal; asimismo, ubicó al poblado "Las Esperanzas" como solicitante de tierras dentro del predio "La Florida", mismo que fue beneficiado con 750-09-57 (setecientos cincuenta hectáreas, nueve áreas, cincuenta y siete centiáreas) las cuales se tomaron de las excedencias resultantes del predio anteriormente referido.

Por otro lado procedió el comisionado en cita a la descripción de diversos predios advirtiendo que únicamente se ubicaron dentro del radio legal los pertenecientes a la Compañía Minera del Norte, S.A., Carbón y Cok, S.A., Inversiones Urbana Monterrey y Compañía Hulera Mexicana S.A.

Respecto de la primera empresa se advierte que el predio correspondiente tiene una superficie de 133-85-29 (ciento treinta y tres hectáreas, ochenta y cinco áreas, veintinueve centiáreas) de agostadero, encontrándose dicha propiedad cercada con alambre de púas de cuatro hilos, con poste de madera y concreto y existiendo exploraciones para extraer caliza, arcilla, biotomita, golomita y otras sustancias.

Con relación al predio propiedad de Carbón y Cok S.A., tiene una superficie de 164-37-37 (ciento sesenta y cuatro hectáreas, treinta y siete áreas, treinta y siete centiáreas), encontrándose en explotación de carácter minero como depósito de diversas sustancias minerales.

Respecto del predio propiedad de Inversiones Urbanas Monterrey, tiene una superficie de 185-02-91 (ciento ochenta y cinco hectáreas, dos áreas, noventa y una centiáreas), la cual se encuentra destinada para zona urbana, con oficinas, casas para los trabajadores mineros, escuelas primaria y secundaria federales, campos deportivos, clínica del Seguro Social y salas cinematográficas.

En lo atinente al predio de la Compañía Hulera Mexicana, cuenta con una superficie de 410-03-30 (cuatrocientas diez hectáreas, tres áreas, treinta centiáreas), totalmente delimitado por alambre de púas en cercas de cuatro hilos con poste de madera y concreto, existiendo una planta lavadora de carbón, planta de subproductos de alquitrán, oficinas de la Compañía Hulera en la que trabajan aproximadamente dos mil quinientos obreros mineros.

Advierte el comisionado que los predios se encuentran en explotación haciendo la observación que el coeficiente de agostadero es de 15.6 hectáreas por unidad animal mayor.

Respecto del predio denominado "La Florida", señalado por los solicitantes como de posible afectación, describió lo siguiente:

"...es propiedad de Miguel Múzquiz con superficie total de 8,637-76-57 Has, de agostadero, superficie que proviene de diferentes fracciones adquiridas por el propietario de la siguiente manera: con fecha 13 de octubre de 1931, compró a los señores José Angel y Reynaldo Rodríguez Tamez, así como a la señora Zapopan Montemayor Vda. de Rodríguez, una superficie de 1,017-00-00 Has., Habiéndose inscrito dicha operación en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 16644, folios 98 a 100, tomo 119, libro primero con fecha 11 de noviembre de 1931; con fecha 13 de octubre de 1931, adquirió 658-00-00 Has., inscribiéndose la operación bajo el número 14656, folios 113, tomo 119, libro primero con fecha 23 de noviembre de 1931; por escritura bajo el número 14818, folios 78 al 81, del tomo 121, libro primero con fecha 4 de junio de 1932, adquirió otras 2,600-00-00 Has.; posteriormente por escritura inscrita bajo el número 14821, folios 85 al 92, del tomo 121, libro primero con fecha 8 de junio de 1932, adquirió una superficie de 3,737-00-00 Has., inscritas en el Registro Público de la Propiedad bajo la partida número 14957, folios 22 al 23, del tomo 124, libro primero con fecha 23 de noviembre de 1932, adquirió una superficie más de 600-00-00 hectáreas; la suma de las fracciones descritas anteriormente arrojan un total de 8,612-00-00 Has., existiendo por lo tanto una diferencia de 25-76-57 Has., encontrándose dentro de la tolerancia permitida, por lo que debe tenerse como superficie real la de 8,637-76-57 Has.; este predio se encuentra destinado a la ganadería con 400 cabezas entre toros y vientres y 120 becerros de herradero, así como 135 cabezas de ganado caballar, marcado con el fierro quemador del propietario, en la inspección realizada se observaron las siguientes instalaciones: 3 casas habitación, 7 perforaciones estando dos de ellas equipadas con pompin yack y una con papalote, 4 pilas de almacenamiento de agua, 15 tanques de tierra para captación de aguas broncas, 25 seleros y dos corrales para manejo de ganado equipado uno de ellos con prensa de herrar, báscula y baño garrapaticida, estando el terreno dividido en 5 postas y una trampa; el terreno se encuentra parcialmente destruido por las excavaciones que se realizan en los predios mineros adyacentes, agudizándose el problema en cuanto a la explotación ganadera con el diario asentamiento de polvo de carbón sobre la vegetación espontánea del terreno".

DECIMO PRIMERO.- El tres de diciembre de mil novecientos ochenta, el Cuerpo Consultivo Agrario emitió dictamen proponiendo negar la acción por falta de fincas afectables, mismo que no culminó con Resolución Presidencial.

DECIMO SEGUNDO.- Con motivo de la inconformidad expresada por los solicitantes en audiencia con el Subsecretario de Asuntos Agrarios, de la Secretaría de la Reforma Agraria, el Delegado Agrario, en consideración al tiempo que había transcurrido desde la última investigación que se había practicado al predio "La Florida", en mil novecientos setenta y cuatro, por Jorge Macedo García, mediante oficio 0503, de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y tres, designó al ingeniero Raúl Rodríguez Valdez, quien fungía como Representante de la Delegación en el Estado de Coahuila a efecto de que llevara a cabo una inspección

ocular en dicho predio, quien aportó el acta de investigación del mismo de veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, de la cual se desprende que el predio de referencia es ahora propiedad de Miguel Mauricio, Javier Eloy y Teresa, de apellidos Múzquiz Cantú, consignado a continuación la parte medular del acta de inspección correspondiente: "...se dio inicio a la investigación, procediendo a realizar un caminamiento perimetral de los terrenos a investigar como a continuación se detalla, se recorrió el lindero norte el cual se encuentra cercado con alambre de púas de 4 hilos y colinda con los predios "La Paloma", "Concepción" y el ejido "Esperanzas", manifestando los testigos que el ejido "La Esperanzas", anteriormente perteneció al predio "La Florida", por lo que fue afectado por el citado ejido con una superficie de 750-00-00 Has.; posteriormente recorrimos el lindero Oeste, observándose que se encuentra cercado con 4 hilos de alambre de púas y colinda con el mismo predio "LA FLORIDA", conocido como San Javier, Palo Blanco y El Gavilán; posteriormente se recorrió el lindero sur cercado con alambre de púas y colinda con las propiedades de Chula Vista, San Fernando y San Juan, y por último se recorrió el lindero Oeste, existiendo cerca en pequeñas fracciones de este lindero y colinda con la vía del ferrocarril Saltillo-Piedras Negras,posteriormente se hizo un recorrido por su interior en forma de zig zag, pudiéndose observar que estos terrenos predomina la siguiente vegetación: mezquite y huizache, gobernadora, nopal, chaparro prieto, hojase, zacate chino, toboso y salado, punta blanca, retama y jarillas, ... también se pudo apreciar que en una superficie de aproximadamente 300-00-00 Has., están siendo ocupadas por el poblado "LA FLORIDA", casco de la misma, las instalaciones debidamente cercadas de la Compañía de Aceros del Norte; en el recorrido que se efectuó dentro de los terrenos de "LA FLORIDA", se encontraron las siguientes instalaciones: 2 estanques con bastante agua, 3 tajos abiertos con agua que pueden ser usados como abrevadero.... y al no encontrar huellas o roce de ganado del propietario ni indicio alguno que declara su presencia y al no encontrar siembras en las pequeñas superficies susceptibles de cultivo que existen, se llegó a la conclusión de que estos terrenos propiedad de Miguel, Teresa y Javier Múzquiz Cantú, que se denominan "LA FLORIDA", motivo de la investigación, se encuentra sin explotar por más de dos años consecutivos sin aparente causa de fuerza mayor que lo justifique...",

En su informe de tres de mayo de mil novecientos noventa y tres el comisionado establece que el grupo solicitante se encuentra en posesión de diversas fracciones del predio "La Florida" al tiempo que manifestó respecto de la zona urbana del poblado "La Florida" que se compone por 28-00-00 (veintiocho hectáreas), localizándose igualmente dentro del predio "La Florida" las instalaciones de la Compañía Aceros del Norte e igualmente la denominada Hacienda de la Florida en la que los propietarios tienen su domicilio y sus potreros para ganado.

El comisionado acompañó a su informe la escritura pública de fecha dieciocho de abril de mil novecientos setenta y siete, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito de Sabinas, Coahuila, bajo la partida número 5013, folios 161, del libro dieciocho, sección I, de catorce de abril de mil novecientos ochenta y tres, en las que se hace constar la donación que hace Miguel Múzquiz Aldape, del predio "La Florida", con superficie de 8,637-76-57 (ocho mil seiscientas treinta y siete hectáreas, setenta y seis áreas, cincuenta y siete centiáreas) en favor de sus tres hijos Miguel, Teresa y Javier de apellidos Múzquiz Cantú.

DECIMO TERCERO.- Mediante oficio número 1975, de veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, el Delegado Agrario en el Estado emitió su opinión sobre la presente acción agraria, en el sentido de que se conceda por concepto de dotación de ejidos al poblado que nos ocupa, de una superficie de 1,500-00-00 (mil quinientas hectáreas), que se tomarían del predio "La Florida", ubicado en el Municipio de Múzquiz, Coahuila, y el resto del terreno afectable es decir 2,300-00-00 (dos mil trescientas hectáreas), se reserven para el nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominaría "Santa Rosa" del mismo municipio y estado.

DECIMO CUARTO.- El Cuerpo Consultivo Agrario, en términos del artículo 16 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres, aprobó dictamen positivo, proponiendo otorgar al poblado "La Florida" una superficie de 1,500-00-00 (un mil quinientas hectáreas).

DECIMO QUINTO.- El veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, se tuvo por radicado el presente expediente en este Tribunal Superior Agrario, en donde se registró bajo el número 344/97.

DECIMO SEXTO.- Mediante Resolución de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, este Tribunal Superior dotó al poblado denominado "La Florida" con una superficie de 1,500-00-00 (mil quinientas hectáreas) de agostadero de mala calidad que se tomarían del predio denominado "La Florida", propiedad de Miguel Mauricio, Teresa y Javier Eloy todos de apellidos Múzquiz Cantú, con fundamento en el artículo

251 de la Ley Federal de Reforma Agraria interpretado a contrario sensu para beneficiar a 83 campesinos capacitados.

DECIMO SEPTIMO.- En contra de la resolución anterior Abelardo y Guillermo Jiménez Buentello, así como Jesús Díaz Díaz, interpusieron juicio de amparo del que tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila bajo el número 113/98 quien emitió sentencia el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Asimismo, la empresa denominada Minerale Monclova, S.A. de C.V. como causahabiente de Compañía Minera La Florida, misma que adquirió la propiedad del bien mediante compraventa realizada en su favor por Miguel, Teresa y Javier Eloy Múzquiz Cantú, promovió juicio de amparo del que tocó conocer al propio Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila bajo el número 98/99, respecto del cual su titular emitió sentencia el dieciséis de junio de dos mil, la cual causó ejecutoria según acuerdo de dicho órgano jurisdiccional fechado el dieciséis de agosto de ese año.

La sentencia inicialmente referida sobreseyó el juicio de amparo respecto de Abelardo y Guillermo Jiménez Buentello por falta de interés jurídico en virtud de que su predio no fue afectado por la resolución que reclamaron.

Respecto del quejoso Jesús Díaz Díaz, la ejecutoria de referencia concedió la protección federal para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución reclamada y se concediera la garantía de audiencia al quejoso. Al efecto se transcribe la parte conducente de la ejecutoria respectiva:

“de acuerdo a las pruebas aportadas a este juicio de garantías, el quejoso JESUS DIAZ DIAZ, acreditó debidamente ser propietario y poseedor del predio rústico cuyas medidas y colindancias se especifican en la copia certificada por notario, de la escritura pública número cuarenta y uno de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y siete, inscrita el ocho de abril del mismo año bajo la partida 7535, folio 24, del libro 214, sección I, documental pública que acompañó a su escrito inicial de demanda y que cuenta con plena eficacia demostrativa, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; en tanto que la susodicha posesión del inmueble se justificó con las informaciones testimoniales rendidas por los testigos RAUL G. DAVILA FLORES Y SALVADOR PIMENTEL TORRES, durante la audiencia constitucional, quienes fueron coincidentes en indicar que el hoy demandante de garantías es propietario, ha tenido y tiene la posesión del predio rústico denominado “Fracción de la Florida”, ubicado en los municipios de Múzquiz y Progreso, ambos de esta Entidad Federativa.

Por otro lado, con las pruebas periciales que obran en el sumario, las cuales fueron practicadas por el perito oficial y por los peritos designados por la parte quejosa y por la autoridad responsable, se obtiene la conclusión de que una porción del predio rústico del quejoso JESUS DIAZ DIAZ, fue afectada por la sentencia que constituye el acto reclamado del Tribunal Superior Agrario, tal como se constata con los planos topográficos de los peritos anexaron a sus dictámenes, los que permiten colegir que el inmueble de garantías quedó parcialmente comprendido dentro de la superficie de 3,800-00-00 hectáreas de terreno que afectó el Tribunal Agrario en la sentencia que se combate, ubicándose con precisión la superficie afectada propiedad del quejoso.

Como corolario de lo anterior, se obtiene que el solicitante de protección constitucional acreditó tanto la propiedad como la posesión jurídica y material del predio rústico denominado “Fracción de la Florida”, y que la sentencia cuya emisión y ejecución reclama sí afecta parte de ese predio por quedar comprendida dentro de la superficie de 3,800-00-00 hectáreas que afectó el Tribunal Superior Agrario mediante la sentencia dictada en el juicio agrario número 344/97, y no obstante dicha afectación agraria el amparista no fue citado ni oído previamente en el procedimiento agrario de que se trata, y por ende, no tuvo la posibilidad de acudir en defensa de sus derechos de propiedad y posesión que tiene sobre el predio rústico precisado, de tal suerte que la actuación autoritaria que impugna en esta vía constitucional aparece transgresión a su garantía individual contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando procedente conceder a JESUS DIAZ DIAZ, la protección federal solicitada en contra de la sentencia que reclama el Tribunal Superior Agrario”.

Por otro lado, la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo número 98/99 concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Minerale Monclova S.A. de C.V. conforme a las siguientes consideraciones y efectos:

1.- “Con las documentales previamente reseñadas la empresa quejosa acreditó fehacientemente, tener la titularidad del predio reclamado, puesto que demostró que Javier, Miguel y Teresa, todos de apellidos Múzquiz Cantú, transmitieron la propiedad de aquel favor de la Compañía Minera La Florida de Múzquiz, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante la compraventa respectiva, y que tal sociedad anónima la transmitió, a su vez, mediante convenio de fusión, a la empresa ahora quejosa”.

De lo anterior se colige que tanto Jesús Díaz Díaz como la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V. son propietarias de diversas fracciones del predio "La Florida", por lo que las operaciones de compraventa que realizaron los quejosos y en especial las referidas en la transcripción anterior resultaron jurídicamente válidas de conformidad con la ejecutoria respectiva.

2.- Del capítulo de resultandos de la ejecutoria respectiva se advierte que Jesús Díaz Díaz reclama una superficie de 650-00 (seiscientos cincuenta hectáreas) en tanto que la empresa Minerales Monclova, S.A. de C. V. reclama una superficie de 850-00-00 (ochocientos cincuenta hectáreas).

3.- De la sentencia ejecutoriada en favor de Jesús Díaz Díaz se colige que "de acuerdo a las pruebas aportadas a este juicio de garantías, el quejoso JESUS DIAZ DIAZ, acreditó debidamente ser propietario y poseedor del predio rústico cuyas medidas y colindancias se especifican en la copia certificada por notario, de la escritura pública número cuarenta y uno de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y siete, inscrita el ocho de abril del mismo año bajo la partida 7535, folio 24, del libro 214, sección I, documental pública que acompañó a su escrito inicial de demanda y que cuenta con plena eficacia demostrativa, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; en tanto que la susodicha posesión del inmueble se justificó con las informaciones testimoniales rendidas por los testigos RAUL G. DAVILA FLORES Y SALVADOR PIMENTEL TORRES, durante la audiencia constitucional, quienes fueron coincidentes en indicar que el hoy demandante de garantías es propietario, ha tenido y tiene la posesión del predio rústico denominado "Fracción de la Florida", ubicado en los municipios de Múzquiz y Progreso, ambos de esta Entidad Federativa.

Por otro lado, con las pruebas periciales que obran en el sumario, las cuales fueron practicadas por el perito oficial y por los peritos designados por la parte quejosa y por la autoridad responsable, se obtiene la conclusión de que una porción del predio rústico del quejoso JESUS DIAZ DIAZ, fue afectada por la sentencia que constituye el acto reclamado del Tribunal Superior Agrario, tal como se constata con los planos topográficos de los peritos anexaron a sus dictámenes, los que permiten colegir que el inmueble de garantías quedó parcialmente comprendido dentro de la superficie de 3,800-00-00 hectáreas de terreno que afectó el Tribunal Agrario en la sentencia que se combate, ubicándose con precisión la superficie afectada propiedad del quejoso".

4.- Por otro lado en relación con la sentencia emitida en el juicio de amparo número 98/99 se colige que "con el desahogo de la prueba pericial que ofertó, que el Area I, del predio "La Florida" resultó afectada...puesto que el perito designado por la empresa inconforme concluyó, en síntesis, que de acuerdo con la referida sentencia, del proyecto aprobado para su ejecución y el acta de ejecución y deslinde iniciada el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, sí se afecta, en la superficie señalada, el Area I, del aludido predio, al quedar comprendida en el polígono que constituye el perímetro de la citada dotación de tierras (fojas 1959 a 1974, del tomo IV); lo anterior quedó corroborado con el peritaje emitido por el perito oficial designado por este órgano jurisdiccional, quien concluyó en similares circunstancias a las apuntadas (fojas 2106 a 2169); por tanto, se insiste, la empresa quejosa sí acreditó que la superficie de tierras con las que el Tribunal Superior Agrario dotó al poblado "La Florida", mediante la resolución reclamada, afectó al predio "La Florida" propiedad de aquélla; por ende, quedó acreditada la identidad del referido predio".

En este sentido se deduce que Jesús Díaz Díaz resultó afectado en una superficie de 650-00-00 (seiscientos cincuenta hectáreas) respecto de una porción del predio "La Florida" en tanto que la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V. resultó afectada en el Area I del predio "La Florida" respecto de la superficie que el quejoso reclamó en su escrito de referencia, equivalente a 850-00-00 (ochocientos cincuenta hectáreas) quedando además acreditada la identidad del predio.

Por otro lado, la ejecutoria en favor de la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., estimó respecto de los efectos de la misma que: "...si el predio "La Florida" pasó a formar parte del patrimonio de la empresa denominada Compañía Minera La Florida de Múzquiz, a través de la compraventa que efectuó Javier Múzquiz Cantú, por sí y como representante legal de Miguel y Teresa de los propios apellidos, en favor de aquélla, acto jurídico el que surtió efectos legales frente a terceros a partir del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y uno, en que quedó registrada la escritura respectiva en el Registro Público de la Propiedad de Sabinas, Coahuila: y, si los trabajos técnicos informativos efectuados al predio de mérito se realizaron, por el ingeniero Raúl Rodríguez Valdés, con posterioridad a tal registro, esto es, el siete de mayo de mil novecientos noventa y tres, en que rindió su informe, resulta meridianamente claro, que las autoridades agrarias que conocieron el procedimiento agrario de donde derivan los actos reclamados, debieron notificar de la posible afectación al predio de mérito, a la empresa denominada Compañía Minera La Florida de Múzquiz, Sociedad Anónima de Capital Variable, causante de la empresa ahora quejosa, y no a Miguel, Teresa y Javier de apellidos Múzquiz Cantú, pues el predio en comento ya no formaba parte de su patrimonio, merced a la compraventa que efectuaron a favor de aquélla, en la indicada fecha; notificación que procedía se realizara a

tal empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 329, párrafo tercero, de la Ley Federal de Reforma Agraria, vigente en la época de inicio del procedimiento agrario de que se trata; que en su artículo Cuarto transitorio, estableció que los expedientes en trámite, cualquiera que fuera su estado, se ajustarían a las disposiciones de la nueva Ley Agraria; artículo que, textualmente, dice: 'Artículo 329.- (se transcribe) En ese contexto, como ninguna de las autoridades que conocieron del procedimiento agrario realizó tal notificación a la empresa Compañía Minera La Florida de Múzquiz, propietaria del predio afectado, es incuestionable que violaron en perjuicio de la empresa ahora quejosa, en su carácter de causahabiente de aquélla, las garantías de audiencia y defensa contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; por tanto, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que, el Tribunal Superior Agrario responsable, deje insubsistente la resolución reclamada, en su lugar emita otra en la que ordene reponer el procedimiento agrario, hasta antes de la citada violación; esto es, hasta aquella actuación en la que el Cuerpo Consultivo Agrario, omitió notificar a la empresa quejosa la posible afectación del predio de su propiedad denominado 'La Florida' a quien tenía el carácter de propietario".

No es óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho de que la parte tercero perjudicada hubiere acreditado, mediante el desahogo de la prueba de inspección judicial que ofertó, que no se encontró dentro de ellas, ninguna construcción o naves industriales ni asentamientos humanos, pozos profundos para extracción de agua; que únicamente se encontró desperdicios de carbón y tres pequeños campamentos que pertenecen a miembros del ejido, y que los ejidatarios del poblado La Florida, no interrumpen los trabajos de la empresa que labora en esa área entre otras cosas; pues el resultado del desahogo de tal medio de convicción resulta intrascendente, por las razones precisadas en párrafos precedentes".

DECIMO OCTAVO.- En cumplimiento a la ejecutoria de treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve, relativa al juicio de amparo número 113/98, el pleno de este Tribunal Superior en sesión de quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve dejó parcialmente insubsistente la sentencia definitiva de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete. En lo atinente a la ejecutoria de amparo respecto del juicio de garantías número 98/99, por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil, se dejó parcialmente insubsistente la sentencia definitiva de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, emitida por el Tribunal Superior Agrario en el juicio 344/97 relativo a la dotación de tierras del poblado "La Florida", Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila, únicamente por lo que se refiere a la quejosa Minerales Monclova, S.A. de C.V.

DECIMO NOVENO.- Asimismo, y en cumplimiento a las ejecutorias, mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil, el Magistrado Instructor ordenó la reposición del procedimiento referido y ordenó la notificación a las quejas, para lo cual se giró despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20 con sede en la ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila, al tiempo de proporcionarles un plazo de cuarenta y cinco días para que una vez notificadas las quejas, pudieran presentar medios de prueba. Toda vez que fue diligenciado el despacho, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20 remitió las constancias respectivas a este Tribunal Superior, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; y 1o., 9o. fracción VIII, y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- Resulta preciso señalar que en virtud de los efectos jurídicos señalados por el artículo 76 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, e igualmente con base en los lineamientos contenidos en las ejecutorias pronunciadas por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila en los juicios de garantías números 113/98 y 98/99, así como derivado de los acuerdos plenarios emitidos por este Tribunal Superior el quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve y de veintiuno de septiembre de dos mil, quedó totalmente insubsistente la sentencia emitida por este Tribunal Superior Agrario el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete en el juicio agrario número 344/97.

TERCERO.- La presente sentencia se emite en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve en el juicio de amparo número 113/98, así como a la dictada por el propio órgano jurisdiccional el dieciséis de junio de dos mil por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, en el juicio de amparo 98/99.

CUARTO.- Ahora bien en relación con la superficie que defienden los quejosos, debe decirse que en obsequio de los términos y lineamientos establecidos por las ejecutorias que se cumplimentan, se considera que tanto Jesús Díaz Díaz como la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., son propietarias de dicha superficie en virtud de que como ha quedado asentado, las ejecutorias a que se hace mérito emitidas por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, concluyeron por un lado que respecto de Jesús Díaz Díaz, acreditó debidamente ser propietario del predio rústico por conducto de la escritura pública número 41 de diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y siete, inscrita en el Registro Público de la Propiedad el ocho de abril de ese año bajo la partida 7535, folio 24, del libro 214, sección primera.

Por otro lado, en lo relativo a la empresa denominada Minerales Monclova, S.A. de C.V., se concluye que el tracto sucesivo de las diversas compraventas, partiendo de Miguel Múzquiz Aldape, quien transmitió a sus descendientes Javier, Miguel y Teresa Múzquiz Cantú y éstos a su vez celebraron compraventa con la empresa denominada Compañía Minera "La Florida", la cual fue fusionada a la negociación Minerales Monclova, S.A. de C.V. fue válido desde la óptica jurídica.

De igual forma se estima tal y como se aprecia de las ejecutorias multicitadas que tanto Jesús Díaz Díaz como la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., resultaron afectadas, el primer quejoso respecto de una superficie de 650-00-00 (seiscientos cincuenta hectáreas), comprendidas dentro del predio "La Florida", en tanto que la negociación en comento resultó afectada con relación a una extensión superficial de 850-00-00 (ochocientos cincuenta hectáreas) comprendidas dentro del Area I del predio denominado "La Florida", lo cual se colige del medio de prueba pericial.

Ahora bien como se deduce de los trabajos técnicos informativos realizados por el comisionado Jorge Macedo García de veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, los cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 143 a 160 en relación con el artículo 211, todos ellos del Código Federal de Procedimientos Civiles, el predio "La Florida" se localizó en explotación ganadera con cuatrocientas cabezas de ganado mayor y ciento veinte de ganado menor, al tiempo que existen instalaciones relacionadas con la explotación minera.

Asimismo, debe señalarse que de conformidad con los trabajos realizados por Raúl Rodríguez Valdez, quien fungía como representante de la Delegación en el Estado de Coahuila, el predio de referencia "se encuentra cercado con alambre de púas de 4 hilos y colinda con los predios "La Paloma", "Concepción" y el ejido "Esperanzas", manifestando los testigos que el ejido "La Esperanzas", anteriormente perteneció al predio "La Florida", por lo que fue afectado por el citado ejido con una superficie de 750-00-00 Has.; posteriormente recorrimos el lindero Oeste, observándose que se encuentra cercado con 4 hilos de alambre de púas y colinda con el mismo predio "LA FLORIDA", conocido como San Javier, Palo Blanco y El Gavilán; posteriormente se recorrió el lindero sur cercado con alambre de púas y colinda con las propiedades de Chula Vista, San Fernando y San Juan, y por último se recorrió el lindero Oeste, existiendo cerca en pequeñas fracciones de este lindero y colinda con la vía del ferrocarril Saltillo-Piedras Negras,posteriormente se hizo un recorrido por su interior en forma de zig zag, pudiéndose observar que estos terrenos predomina la siguiente vegetación: mezquite y huizache, gobernadora, nopal, chaparro prieto, hojase, zacate chino, toboso y salado, punta blanca, retama y jarillas, ... también se pudo apreciar que en una superficie de aproximadamente 300-00-00 Has., están siendo ocupadas por el poblado "LA FLORIDA", casco de la misma, las instalaciones debidamente cercadas de la Compañía de Aceros del Norte; en el recorrido que se efectuó dentro de los terrenos de "LA FLORIDA", se encontraron las siguientes instalaciones: 2 estanques con bastante agua, 3 tajos abiertos con agua que pueden ser usados como abrevadero.... y al no encontrar huellas o roce de ganado del propietario ni indicio alguno que declara su presencia y al no encontrar siembras en las pequeñas superficies susceptibles de cultivo que existen, se llegó a la conclusión de que estos terrenos propiedad de Miguel, Teresa y Javier Múzquiz Cantú, que se denominan "LA FLORIDA", motivo de la investigación, se encuentra sin explotar por más de dos años consecutivos sin aparente causa de fuerza mayor que lo justifique...".

Sin embargo, y con base en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 98/99 debe señalarse que la referida inspección ocular resultó intrascendente ya que conforme a dicha sentencia ejecutoriada "No es óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho de que la parte tercero perjudicada hubiere acreditado, mediante el desahogo de la prueba de inspección judicial que ofertó, que no se encontró dentro de ellas, ninguna construcción o naves industriales ni asentamientos humanos, pozos profundos para extracción de agua; que únicamente se encontró desperdicios de carbón y tres pequeños campamentos que pertenecen a miembros del ejido, y que los ejidatarios del poblado La Florida, no interrumpen los trabajos de la empresa que labora en esa área entre otras cosas; pues el resultado del desahogo de tal medio de convicción resulta intrascendente, por las razones precisadas en párrafos precedentes".

En este orden de ideas y en estricto cumplimiento a la ejecutoria a que se hace mérito, la inspección ocular de referencia al resultar intrascendente, no es idónea para acreditar la inexploración del predio tantas veces citado.

Por otro lado, se deriva que Jesús Díaz Díaz compareció a deducir sus derechos y presentó diversas documentales entre las que se localiza la escritura pública número 41 de diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y siete, realizada ante la fe del notario público número 3 del Distrito de Sabinas, Estado de Coahuila, a través de la cual adquirió una superficie de 2,025-32-90.69 (dos mil veinticinco hectáreas, treinta y dos áreas, noventa centiáreas, sesenta y nueve miliáreas) tal y como se aprecia igualmente de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 113/98, a la cual el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, le otorgó pleno valor probatorio para acreditar la propiedad de dicho inmueble, concediéndosele igualmente por este Tribunal Superior plenitud probatoria a dicho instrumento público en términos de lo dispuesto por el numeral 129 en relación con el artículo 202 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable en la especie.

Asimismo, se advierte que Jesús Díaz Díaz adjuntó el plano del terreno rústico en el que se aprecia dicha superficie, emitido por el Delegado Regional de Catastro, al cual se le concede igualmente pleno valor probatorio por tratarse de un documento emitido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones conforme a los preceptos referidos en la parte final del párrafo anterior.

También adjuntó registro del fierro de herrar, expedido por el Gobierno del Estado de Coahuila, con el que igualmente comprueba que utiliza el predio para la ganadería, al tiempo que acompañó el inventario ganadero compuesto por ciento ochenta vaquillas y ocho equinos, documento igualmente emitido en favor de Jesús Díaz Díaz por la Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado de Coahuila, con los cuales corrobora la explotación ganadera del predio respectivo.

Por otro lado, debe decirse que el dictamen pericial emitido por el perito tercero en discordia estableció lo siguiente:

“Sí existe identidad tanto formal como material en ambos predios el área I que es propiedad de la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V. y el predio propiedad del C. JESUS DIAZ DIAZ, ambos predios se encuentran delimitados físicamente mediante cerca de alambre de púas y postas de madera en más de un 90% de su superficie, su calidad es de agostadero, dedicados superficialmente a la ganadería extensiva, con algunas muy pequeñas superficies de agricultura de temporal. El subsuelo de estos predios se encuentra dedicado a la minería, específicamente extracción de carbón mineral, la totalidad del subsuelo está concesionado mediante denuncios mineros a terceras personas ajenas al presente juicio agrario, quienes se dedican a la extracción del carbón, mismo que es comercializado a la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., quien en su predio “área I” a un costado del poblado “La Florida” tiene instalada desde hace muchos años una planta lavadora de carbón, se aprecian dentro de la superficie de ambos predios minas a cielo abierto conocidas como tajos y minas subterráneas mediante túneles o galerías. Los dos predios se localizan al sureste de la ciudad de Melchor Múzquiz, partiendo de ésta por la carretera que conduce a Nueva Rosita, a la altura de la población de Palau, se toma hacia el sureste otra carretera que conduce a la población de Minas de Barroterán, en la cual se toma una brecha de tercería con rumbo poniente, hasta llegar al poblado denominado minerales “La Florida”, donde se ubica la lavadora de carbón que lleva el mismo nombre, poblado y lavadora se encuentran dentro del predio propiedad de la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., colinda con este predio al lado sur se encuentra el predio propiedad de C. JESUS DIAZ DIAZ. De los predios antes referidos el que es propiedad de la empresa mineral Monclova se encuentra en su totalidad dentro del municipio de Melchor Múzquiz y el predio propiedad del C. JESUS DIAZ DIAZ se encuentra comprendido dentro de dos municipios, el municipio de Melchor Múzquiz donde se encuentra la mayor parte del predio y el municipio de Progreso, los dos municipios pertenecen al estado de Coahuila.

El presente dictamen se rinde con apego a los cuestionamientos formulados por las partes mismos que obran en autos dentro a fojas 08 y 33 del despacho S-14/2001, a anexando plano elaborado con motivo del levantamiento topográfico en el que se ilustran ambos predios, asimismo se anexan cuadros de construcción de los mismos. También se anexa un acta circunstanciada levantada con motivo de una inconformidad manifestada por los representantes de los poblados solicitantes. Para la realización del presente trabajo se empleó una estación total (teodolito-distanciómetro) de la marca Pentax, una computadora de campo para procesar los datos, de la misma marca Pentax, apoyado en un G.P.S. de la marca Magallanes (posicionador global de satélites) para obtener información de las proyecciones transversas de mercator (coordenadas U.T.M.) vía satélite”.

En este orden de ideas, del análisis de los trabajos técnicos e informativos realizados por el comisionado Jorge Macedo García e igualmente de la inspección ocular practicada al predio "La Florida", copropiedad de

Miguel Mauricio, Teresa y Javier Eloy, de apellidos Múzquiz Cantú, por el ingeniero Raúl Rodríguez Valdez, se advierte de los primeros que el predio a que se hace referencia se encontraba explotado en su totalidad.

Asimismo, debe señalarse que el amparista Jesús Díaz Díaz ofreció la prueba testimonial a cargo de Raúl Dávalos Flores y Salvador Pimentel Torres quienes manifestaron en la audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil uno, realizada ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, que conoce el predio rústico denominado "La Fracción de La Florida" el cual se encuentra localizado en los municipios de Múzquiz y Progreso, siendo la calidad de tierras de agostadero, el cual pertenece a Jesús Díaz Díaz, quien lo tiene en posesión desde hace catorce años aproximadamente, en calidad de propietario, el cual se encuentra explotado por su dueño ganaderamente, con ganado bovino, becerros cruzados y caprinos, asimismo, manifestó el testigo que su propietario lo dedica a la distribución de aguajes y efectúa limpieza de estanques, así como lleva a cabo tareas de complementación de cercos; de igual forma aseveró que el predio en comento lo está poseyendo Jesús Díaz Díaz a quien conoce desde hace catorce años, ya que en su calidad de médico veterinario ha atendido a los animales propiedad de Jesús Díaz Díaz.

Por lo que corresponde al segundo testigo Salvador Pimentel Torres, el declarante estableció que conoce el predio rústico denominado "La Fracción de La Florida" el cual se encuentra localizado en el Municipio de Múzquiz, siendo la calidad de tierras de agostadero, el cual pertenece a Jesús Díaz Díaz quien lo tiene en posesión aproximadamente entre doce y quince años, en calidad de propietario, el cual se encuentra explotado por su dueño ganaderamente, asimismo manifestó el testigo que su propietario lo dedica a la distribución de aguajes y efectúa limpieza de estanques, así como lleva a cabo tareas de complementación de cercos; de igual forma aseveró que el predio en comento lo está poseyendo Jesús Díaz Díaz a quien conoce desde hace aproximadamente siete años.

De igual manera y a mayor abundamiento se establece respecto de la prueba testimonial aportada por Jesús Díaz Díaz y a cargo de Raúl Dávalos Flores y Salvador Pimentel Torres que el predio denominado fracción de "La Florida", es propiedad de Jesús Díaz Díaz, con la superficie anteriormente especificada, el cual se encontraba en explotación por su propietario desde hace aproximadamente quince años, circunstancia que se acreditó por Jesús Díaz Díaz con base en este elemento probatorio, sin que se desprenda de autos que dicho contexto jurídico y fáctico hubiese sido impugnado por la contraparte ni tampoco que éste fuera desvirtuado por la misma, de lo que se concluye que el predio de referencia fue explotado por su propietario en los términos precedentes. Dicha probanza se valora en términos de los numerales 165 a 167 y 214 a 216 del propio ordenamiento legal.

Asimismo, con base en lo anteriormente precisado se concluye en relación con la porción del predio "La Florida" que, Jesús Díaz Díaz aportó diversos medios de prueba que corroboran la propiedad del predio "La Florida" en la porción correspondiente, situación jurídica que igualmente fue reconocida por la ejecutoria que se cumplimenta. De igual manera con las pruebas analizadas Jesús Díaz Díaz comprobó que la fracción del predio "La Florida" se localizó debidamente explotada en forma ganadera, al tiempo que por conducto de la probanza testimonial corroboró la posesión que ejerce sobre la fracción del predio a que se hace mérito, con una antigüedad de aproximadamente veinte años, de igual forma acreditó mediante la prueba pericial que la superficie respectiva fue afectada por la resolución que reclamó en la vía constitucional, por lo que de conformidad con el acervo probatorio correspondiente dicha fracción resulta inafectable de conformidad con lo preceptuado por los numerales 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por otro lado, la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., compareció aportando diversas probanzas documentales para acreditar la propiedad del inmueble en cita, las cuales se relacionaron en el juicio de amparo número 98/99, concluyendo la ejecutoria multicitada que la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., es propietaria del Area I del predio "La Florida", con superficie de 850-00-00 (ochocientos cincuenta hectáreas) por lo que se omite su valoración en virtud de que la ejecutoria que se cumplimenta determinó la propiedad del predio en los términos precisados.

De igual forma la empresa en comento ofreció la probanza testimonial sita a foja 62 y siguientes del despacho diligenciado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, desahogada el veintisiete de septiembre de dos mil uno y a cargo de Jesús Hernández Limón, Juan Héctor Tort Esquinca y Andrés de Hoyos Soto quienes coincidentemente declaran que conocen a la empresa denominada Minerales Monclova, S.A. de C.V., asimismo que conocieron a la Compañía Minera "La Florida", y que el predio rústico controvertido fue propiedad de dicha Compañía, conociendo que el nombre del mismo predio era el de "La Florida", ubicado en el Municipio de Múzquiz, Coahuila, conociendo que las tierras son de mala calidad concretamente de agostadero y que el predio tiene una superficie aproximada de 2,500-00-00 (dos mil quinientas hectáreas) dividido en tres fracciones, habiendo tenido la posesión inicialmente la Compañía Minera La Florida de Múzquiz en tanto que actualmente es la Compañía Minerales Monclova, quien se encuentra en posesión del

predio a partir de mil novecientos noventa y ocho, siendo propietaria del predio, dedicándose según Jesús Hernández al lavado de carbón, almacenamiento de presa de jales a material estéril, y a los caminos de acceso al carbón, en tanto que Héctor Tort manifestó que se dedica a beneficiar mineral y Andrés Hoyos que se dedica a la exploración y explotación de recursos minerales, resultando también que la empresa se dedica a la búsqueda de vetas minerales. Todo lo anterior en referencia a que los testigos laboraban en la empresa a que se hace mérito y tienen al menos veinte años de vivir en ese lugar.

Asimismo, en relación con el dictamen del perito tercero en discordia de quince de abril de dos mil dos se establece que existe identidad entre el predio "La Florida" y lo señalado en las escrituras anteriormente referidas que señalan como propietario a la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V.

Al efecto se transcribe la parte conclusiva del dictamen del perito tercero:

CONCLUSION

"Sí existe identidad tanto formal como material en ambos predios el área I que es propiedad de la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V. y el predio propiedad del C. JESUS DIAZ DIAZ, ambos predios se encuentran delimitados físicamente mediante cerca de alambre de púas y postas de madera en más de un 90% de su superficie, su calidad es de agostadero, dedicados superficialmente a la ganadería extensiva, con algunas muy pequeñas superficies de agricultura de temporal. El subsuelo de estos predios se encuentra dedicado a la minería, específicamente extracción de carbón mineral, la totalidad del subsuelo está concesionado mediante denuncios mineros a terceras personas ajenas al presente juicio agrario, quienes se dedican a la extracción del carbón, mismo que es comercializado a la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., quien en su predio "área I" a un costado del poblado "La Florida" tiene instalada desde hace muchos años una planta lavadora de carbón, se aprecian dentro de la superficie de ambos predios minas a cielo abierto conocidas como tajos y minas subterráneas mediante túneles o galerías. Los dos predios se localizan al sureste de la ciudad de Melchor Múzquiz, partiendo de ésta por la carretera que conduce a Nueva Rosita, a la altura de la población de Palau, se toma hacia el sureste otra carretera que conduce a la población de Minas de Barroterán, en la cual se toma una brecha de tercería con rumbo poniente, hasta llegar al poblado denominado minerales "La Florida", donde se ubica la lavadora de carbón que lleva el mismo nombre, poblado y lavadora se encuentran dentro del predio propiedad de la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., colinda con este predio al lado sur se encuentra el predio propiedad de C. JESUS DIAZ DIAZ. De los predios antes referidos el que es propiedad de la empresa mineral Monclova se encuentra en su totalidad dentro del municipio de Melchor Múzquiz y el predio propiedad del C. JESUS DIAZ DIAZ se encuentra comprendido dentro de dos municipios, el municipio de Melchor Múzquiz donde se encuentra la mayor parte del predio y el municipio de Progreso, los dos municipios pertenecen al estado de Coahuila.

El presente dictamen se rinde con apego a los cuestionamientos formulados por las partes mismos que obran en autos dentro a fojas 08 y 33 del despacho S-14/2001, a anexando plano elaborado con motivo del levantamiento topográfico en el que se ilustran ambos predios, así mismo se anexan cuadros de construcción de los mismos. También se anexa un acta circunstanciada levantada con motivo de una inconformidad manifestada por los representantes de los poblados solicitantes. Para la realización del presente trabajo se empleó una estación total (teodolito-distanciómetro) de la marca Pentax, una computadora de campo para procesar los datos, de la misma marca Pentax, apoyado en un G.P.S. de la marca Magallanes, (posicionador global de satélites) para obtener información de las proyecciones transversas de mercator (coordenadas U.T.M.) vía satélite".

Del análisis de los trabajos técnicos e informativos realizados por el comisionado Jorge Macedo García e igualmente de la inspección ocular practicada al predio "La Florida", copropiedad de Miguel Mauricio, Teresa y Javier Eloy, de apellidos Múzquiz Cantú, por el ingeniero Raúl Rodríguez Valdez, se advierte de los primeros que el predio a que se hace referencia se encontraba explotado en su totalidad, en tanto que de los citados en segundo lugar se advierte que conforme a la ejecutoria de dieciséis de junio de dos mil, dicha inspección resultaba intrascendente por lo que en dichos términos se valora.

Por otro lado de las probanzas testimoniales aportadas por la Empresa tantas veces citada, se desprende que los testigos radican en el lugar controvertido desde hace más de veinte años, señalando en términos generales que el Area I del predio "La Florida" perteneció originalmente a la Empresa Minera "La Florida de Múzquiz", la cual desde ese tiempo explotó mineralmente el inmueble, y una vez que ocurrió la fusión en favor de la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., dicha compañía continuó explotando el terreno en comento dentro del área que se ha señalado. En este orden de ideas la prueba testimonial aportada por la Empresa y desahogada por los testigos de referencia resulta concluyente para determinar que el predio en cita se ha explotado por las diversas empresas mineras desde hace más de veinte años. A dicho medio de

prueba, que se desahogó en los términos de los artículos 165 a 187 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable en la especie se le confiere valor probatorio pleno en términos de los numerales 215 y 216 del citado ordenamiento legal.

En lo atinente a la probanza pericial aportada por la empresa tantas veces señalada e igualmente al dictamen del perito tercero y de conformidad con los lineamientos precisados en la ejecutoria que se cumplimenta, respecto de dicho medio de prueba, resulta concluyente que el Area I del predio denominado "La Florida" es propiedad de la Empresa Minerales Monclova, superficie que ha quedado plenamente identificada, en términos de la propia ejecutoria y de la pericial relacionada anteriormente, respecto de una superficie de 850-00-00 (ochocientas cincuenta hectáreas) tal y como se deriva de los diversos contextos probatorios que se han analizado.

En este orden de ideas y con base en las probanzas respectivas, las cuales se analizaron en los términos anteriores y de conformidad con la valoración correspondiente, es concluyente que el Area I del predio denominado "La Florida" es propiedad de la empresa denominada Minerales Monclova, S.A. de C.V., con una superficie de 850-00-00 (ochocientas cincuenta hectáreas), la cual se ha encontrado en explotación por sus propietarios, por lo que dicha superficie resulta inafectable de conformidad con lo preceptuado por el numeral 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; y 1o., 7o. y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- En la materia de la presente sentencia, son de declararse inafectables las fracciones del predio denominado "La Florida" propiedad de Jesús Díaz Díaz con superficie de 650-00-00 (seiscientos cincuenta hectáreas), así como de la empresa denominada Minerales Monclova, S.A. de C.V. con superficie de 850-00-00 (ochocientas cincuenta hectáreas) ambas fracciones ubicadas en el Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila, en relación con el cumplimiento a las ejecutorias emitidas por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila respecto de los juicios de amparo números 113/98 y 98/99.

SEGUNDO.- Es de negarse la acción de dotación de tierras al poblado denominado "La Florida", Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila.

TERCERO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila y los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Coahuila, a la Procuraduría Agraria y al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, el cumplimiento realizado a la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional en los juicios de amparo números 113/98 y 98/99. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firman los Magistrados que lo integran, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a seis de septiembre de dos mil dos. El Magistrado Presidente, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Luis Octavio Porte Petit Moreno**, **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Humberto Jesús Quintana Miranda**.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 363/97, relativo a la creación de un nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará Santa Rosa, promovido por campesinos del poblado Melchor Múzquiz, Municipio de Múzquiz, Coah.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 363/97, que corresponde al expediente 626, relativo a la solicitud de creación de nuevo centro de población ejidal, promovida por un grupo de campesinos radicados en el poblado "Melchor Múzquiz", Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila, que de constituirse se

denominará "Santa Rosa" y en cumplimiento a las ejecutorias dictadas por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, la primera correspondiente al juicio de amparo número 91/98 de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y la segunda inherente al juicio de amparo número 115/99 de dieciséis de junio de dos mil, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito de cinco de noviembre de mil novecientos setenta y uno, un grupo de campesinos que dijo radicar en el poblado denominado "Melchor Múzquiz", municipio del mismo nombre, Estado de Coahuila, dirigió al Delegado Agrario en el Estado, solicitud para la creación del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "Santa Rosa".

SEGUNDO.- Por oficio número 61587, de veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y dos, la Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal instauró el expediente bajo el número 626. La solicitud se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, el veintidós de abril de mil novecientos setenta y dos, y en el **Diario Oficial de la Federación** el catorce de agosto de mil novecientos noventa y seis.

TERCERO.- El Comité Particular Ejecutivo quedó integrado por Angel O. Herrera Morales, Salvador Sandoval Calderón y José García Rodríguez, en su carácter de presidente, secretario y vocal, respectivamente, a quienes se les expidieron los nombramientos correspondientes el veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y dos.

CUARTO.- Mediante oficio número 620338 del veintidós de agosto de mil novecientos setenta y dos, el Oficial Mayor del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización ordenó la ejecución de trabajos censales correspondientes, comisionando al efecto, al ingeniero Alvaro Peña Valdez, quien rindió su informe el veintisiete de octubre de mil novecientos setenta y dos, del que se desprende que el número de solicitantes asciende a 55 individuos con capacidad agraria individual.

Mediante oficio 3740, de siete de agosto de mil novecientos setenta y cuatro encomendó a Jorge Macedo García, la realización de trabajos técnicos informativos complementarios, quien rindió su informe el veintiocho de noviembre del mismo año, en el que da cuenta de lo siguiente en relación con los predios investigados:

El comisionado manifiesta que dentro del radio legal de afectación se localizan diversos ejidos cuyas tierras resultan inafectables por encontrarse inmersas dentro del régimen de propiedad ejidal; asimismo, ubicó al poblado "Las Esperanzas" como solicitante de tierras dentro del predio "La Florida", mismo que fue beneficiado con 750-09-57 (setecientos cincuenta hectáreas, nueve áreas, cincuenta y siete centiáreas) las cuales se tomaron de las excedencias resultantes del predio anteriormente referido.

Por otro lado procedió el comisionado en cita a la descripción de diversos predios advirtiendo que únicamente se ubicaron dentro del radio legal los pertenecientes a la Compañía Minera del Norte, S.A., Carbón y Cok, S.A., Inversiones Urbana Monterrey y Compañía Hulera Mexicana, S.A.

Respecto de la primera empresa se advierte que el predio correspondiente tiene una superficie de 133-85-29 (ciento treinta y tres hectáreas, ochenta y cinco áreas, veintinueve centiáreas) de agostadero, encontrándose dicha propiedad cercada con alambre de púas de cuatro hilos, con poste de madera y concreto y existiendo exploraciones para extraer caliza, arcilla, biotomita, golomita y otras sustancias.

Con relación al predio propiedad de Carbón y Cok, S.A., tiene una superficie de 164-37-37 (ciento sesenta y cuatro hectáreas, treinta y siete áreas, treinta y siete centiáreas), encontrándose en explotación de carácter minero como depósito de diversas sustancias minerales.

Respecto del predio propiedad de Inversiones Urbanas Monterrey el mismo tiene una superficie de 185-02-91 (ciento ochenta y cinco hectáreas, dos áreas, noventa y una centiáreas) se encuentra destinada para zona urbana, con oficinas, casas para los trabajadores mineros, escuelas primaria y secundaria federales, campos deportivos, clínica del Seguro Social y salas cinematográficas.

En lo atinente al predio de la Compañía Hulera Mexicana, cuenta con una superficie de 410-03-30 (cuatrocientos diez hectáreas, tres áreas, treinta centiáreas), totalmente delimitado por alambre de púas en cercas de cuatro hilos con posta de madera y concreto, existiendo una planta lavadora de carbón, planta de subproductos de alquitrán, oficinas de la Compañía Hulera en la que trabajan aproximadamente dos mil quinientos obreros mineros.

Advierte el comisionado que los predios se encuentran en explotación haciendo la observación que el coeficiente de agostadero es de 15.6 hectáreas por unidad animal mayor.

Respecto del predio denominado "La Florida", describió lo siguiente:

"...es propiedad de Miguel Múzquiz con superficie total de 8,637-76-57 Has, de agostadero, superficie que proviene de diferentes fracciones adquiridas por el propietario de la siguiente manera: con fecha 13 de octubre de 1931, compró a los señores José Angel y Reynaldo Rodríguez Támez, así como a la señora Zapopan Montemayor Vda. de Rodríguez, una superficie de 1,017-00-00 Has., Habiéndose inscrito dicha operación en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 16644, folios 98 a 100, tomo 119, libro primero con fecha 11 de noviembre de 1931; con fecha 13 de octubre de 1931, adquirió 658-00-00 Has., inscribiéndose la operación bajo el número 14656, folios 113, tomo 119, libro primero con fecha 23 de noviembre de 1931; por escritura bajo el número 14818, folios 78 al 81, del tomo 121, libro primero con fecha 4 de junio de 1932, adquirió otras 2,600-00-00 Has; posteriormente por escritura inscrita bajo el número 14821, folios 85 al 92, del tomo 121, libro primero con fecha 8 de junio de 1932, adquirió una superficie de 3,737-00-00 Has., inscritas en el Registro Público de la Propiedad bajo la partida número 14957, folios 22 al 23, del tomo 124, libro primero con fecha 23 de noviembre de 1932, adquirió una superficie más de 600-00-00 hectáreas; la suma de las fracciones descritas anteriormente arrojan un total de 8,612-00-00 Has., existiendo por lo tanto una diferencia de 25-76-57 Has., encontrándose dentro de la tolerancia permitida, por lo que debe tenerse como superficie real la de 8,637-76-57 Has.; este predio se encuentra destinado a la ganadería con 400 cabezas entre toros y vientres y 120 becerros de herradero, así como 135 cabezas de ganado caballar, marcado con el fierro quemador del propietario, en la inspección realizada se observaron las siguientes instalaciones: 3 casas habitación, 7 perforaciones estando dos de ellas equipadas con pompin yack y una con papalote, 4 pilas de almacenamiento de agua, 15 tanques de tierra para captación de aguas broncas, 25 seleros y dos corrales para manejo de ganado equipado uno de ellos con prensa de herrar, báscula y baño garrapaticida, estando el terreno dividido en 5 postas y una trampa; el terreno se encuentra parcialmente destruido por las excavaciones que se realizan en los predios mineros adyacentes, agudizándose el problema en cuanto a la explotación ganadera con el diario asentamiento de polvo de carbón sobre la vegetación espontánea del terreno".

QUINTO.- El seis de marzo de mil novecientos setenta y seis el comisionado informó que mediante oficio número 575768 de tres de marzo de mil novecientos setenta y seis, se le ordenó la realización de los trabajos técnicos informativos relativos al nuevo centro de población ejidal denominado "Santa Rosa", ubicado en el Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila del que se deriva que procedió a investigar diversos predios en los términos siguientes:

"REGIMEN DE PROPIEDAD.- Predio "Los Corrales", propiedad de Josefina Santos Landois con superficie de 9982-31-07 hectáreas, según registro de 18 de marzo de 1969, bajo la partida número 21807, folios 1359137 del Tomo 186 libro 1o. Sección de la propiedad en el Registro Público de la Propiedad, en Sabinas, Coahuila; en explotación ganadera con 480 vacas, 391 novillos, 28 toros; los Certificados de Inafectabilidad Ganadera número 200977 de fecha 8 de abril de 1970 publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 19 de agosto de 1970.

PREDIO "LAS CUMBRES".- Propiedad de Miguel Angel Santos Landois con superficie de 12,100-93-59 hectáreas, según el Registro Público de la Propiedad en Sabinas, Coahuila; bajo la partida número 21806, folios 1339153 del Tomo 186 libro 1o. sección de la propiedad del 18 de marzo de 1969, en explotación ganadera con certificado de inafectabilidad derecha 23 de noviembre de 1970 publicado en el Diario Oficial de 30 de noviembre de 1970.

COMPAÑIA GANADERA "EL PALMAR".- Con certificado de Inafectabilidad No. 201845 de fecha 23 de noviembre de 1970 publicado en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 1970.

COMPAÑIA GANADERA "LOS PINTOS".- Con superficie de 7807-42-17 hectáreas, bajo partida número 18385 folios 91 a 92 del tomo 148 del libro 1o. Sección de la propiedad de agosto 9 de 1966, en explotación ganadera con Certificado de Inafectabilidad No. 199332 de fecha 16 de febrero de 1970 publicada en el Diario Oficial el 6 de marzo de 1970.

PREDIO propiedad de Diego Javier Elguezabal Elguezabal, con superficie de 713-79-69 hectáreas, bajo la partida número 32, folios 56 a 57 del libro 1o. sección propiedad de 12 de julio de 1975 en explotación ganadera con Certificado de Inafectabilidad No. 199332 de fecha 16 de febrero de 1970, publicado en el Diario Oficial el 6 de mayo de 1970.

PREDIO propiedad de Gilberto Eduardo Elguezabal Gamboa con superficie de 1287-28-32 hectáreas, bajo la partida número 276, folios 143 a 144 del libro 2 sección 1a. de la Propiedad de 29 de enero de 1976 en explotación ganadera con Certificado de Inafectabilidad... publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 6 de mayo de 1970.

PREDIO "RINCON DE MARIA".- Propiedad de Urbano de la Garza con superficie de 9858-79-41 hectáreas, bajo la partida número 14658, folios 49 a 50 del tomo 121 del libro 1o. sección de la propiedad de 26 de noviembre de 1972 en explotación ganadera con Certificado de Inafectabilidad de fecha 16 de febrero de 1970, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 12 de agosto de 1970.

PREDIO propiedad de Alberto Múzquiz Elguezabal con superficie de 7944-65-22 hectáreas, bajo la partida número 591 folios 36 a 38 del Tomo 5 libro 1o. sección de la propiedad de fecha 20 de junio de 1974 en explotación ganadera con Certificado de Inafectabilidad número 201905 de fecha 23 de noviembre de 1970 publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de noviembre de 1970.

PREDIO propiedad de Gloria Estela Elguezabal Mantes de Elguezabal con superficie de 5681-57-12 hectáreas de agostadero, bajo la partida número 33, folios 57 a 60 del libro 1o. de la sección de la propiedad de 16 de junio de 1975 en explotación ganadera con Certificado de Inafectabilidad No. 202678 de fecha 16 de febrero de 1970 publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 1970.

PREDIO, propiedad de Diego Javier Elguezabal Elguezabal con superficie de 2859-49-39 hectáreas, bajo la partida número 34, folios 60 a 62 del libro 1o. sección I de la propiedad de 16 de junio de 1975, en explotación ganadera con Certificado de Inafectabilidad número 202678 de fecha 16 de febrero de 1970 publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 1970.

PREDIO propiedad de Gilberto Eduardo Elguezabal Gamboa con superficie de 3261-41-97 hectáreas, bajo la partida número 275 folios 142 a 143 del libro 2 sección I de la propiedad de 29 de enero de 1976, en explotación ganadera con Certificado de Inafectabilidad número 202678 de fecha 16 de febrero de 1970 publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 1970.

Se anexan datos del Registro Público de la Propiedad.

La opinión de los Comisionados de acuerdo con el estado del terreno y los datos presentados, los comisionados consideran que no es posible la creación del N.C.P.E. en virtud de ser pequeñas propiedades con Certificado de Inafectabilidad en explotación ganadera."

SEXTO.- Por oficio número 911 de doce de marzo de mil novecientos setenta y nueve, el Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en Coahuila, encomendó al arquitecto Francisco López Soberano, la investigación de la capacidad agraria individual y colectiva del grupo solicitante, quien rindió su informe el diez de mayo de mil novecientos setenta y nueve, consignando lo siguiente: "El 12 de abril de 1979, se lanzó convocatoria al C. Presidente del Comité Particular Ejecutivo Agrario y a los solicitantes para llevar a cabo los trabajos preliminares mediante la aplicación del artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria y se fijó la fecha para la asamblea el día 22 del mismo mes y año, habiéndose realizado los trabajos y detectándose en el censo a 28 campesinos solicitantes, el resto del total de los solicitantes ya abandonaron definitivamente el grupo..."

SEPTIMO.- Por acuerdo de diez de octubre de mil novecientos setenta y nueve el Cuerpo Consultivo Agrario propuso declarar improcedente la acción de nuevo centro de población ejidal, por falta de capacidad colectiva del grupo solicitante, ordenando la realización de las notificaciones correspondientes y el archivo del expediente como asunto concluido.

OCTAVO.- Por escrito de diecinueve de abril de mil novecientos ochenta y nueve, dirigido a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, de la Secretaría de la Reforma Agraria, el Comité Particular Ejecutivo del grupo solicitante, interpuso su inconformidad en contra del acuerdo del Cuerpo Consultivo Agrario a que se hizo referencia en el resultando anterior. En atención a la inconformidad planteada a los solicitantes y en cumplimiento a las órdenes giradas al Delegado Agrario en el Estado mediante oficio número 1696, de veintisiete de septiembre del mismo año, se comisionó al ingeniero Jesús García Juárez, a efecto de que investigara la capacidad agraria individual y colectiva del grupo solicitante, quien rindió su informe el veintisiete de octubre del citado año, del que se infiere que existe un total de veintinueve campesinos capacitados.

NOVENO.- Mediante oficio 0503, de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y tres, el Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, designó al ingeniero Raúl Rodríguez Valdez, a efecto de que llevara a cabo trabajos técnicos e informativos en relación al predio denominado "La Florida" y específicamente, una inspección ocular en dicho predio, quien rindió su informe el siete de mayo del mismo año, en el que

manifiesta que el predio de referencia es ahora propiedad de Miguel Mauricio, Javier Eloy y Teresa, de apellidos Múzquiz Cantú, deduciéndose de la inspección que una parte del predio se encuentra cercada, existiendo áreas dedicadas a la actividad minera, señalándose diversas construcciones vinculadas con dicha actividad e igualmente la inexistencia de ganado de los propietarios.

El comisionado acompañó a su informe la escritura pública de dieciocho de abril de mil novecientos setenta y siete, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito de Sabinas, Coahuila, bajo la partida número 5013, folios 161, del libro dieciocho, sección I, de catorce de abril de mil novecientos ochenta y tres, en la que se hace constar la donación que hace Miguel Múzquiz Aldape, del predio "La Florida", con superficie de 8,637-76-57 (ocho mil seiscientos treinta y siete hectáreas, setenta y seis áreas, cincuenta y siete centiáreas) en favor de sus tres hijos Miguel, Teresa y Javier de apellidos Múzquiz Cantú.

DECIMO.- La Dirección General de Procedimientos Agrarios, de la Secretaría de la Reforma Agraria, emitió su opinión el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y tres, en sentido positivo. Por su parte, el Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado, mediante oficio sin número, de veintinueve de noviembre del mismo año, pronunció su opinión en el mismo sentido.

DECIMO PRIMERO.- El Cuerpo Consultivo Agrario, al recibir el expediente formuló dictamen positivo que aprobó en sesión de pleno de quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

DECIMO SEGUNDO.- Por auto de veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, se tuvo por radicado el presente expediente en este Tribunal Superior Agrario, habiéndose registrado bajo el número 363/97.

DECIMO TERCERO.- Por sentencia de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete este Tribunal Superior consideró procedente la creación del nuevo centro de población ejidal que se denominaría "Santa Rosa" y dotó de 2,300-00-00 (dos mil trescientas hectáreas) de agostadero de mala calidad a dicho poblado, las cuales se tomarían del predio denominado "La Florida".

DECIMO CUARTO.- En contra de dicha resolución promovieron juicio de amparo, Abelardo y Guillermo Jiménez Buentello y Jesús Díaz Díaz a los que les correspondió el número 91/98 e igualmente interpuso recurso constitucional la Compañía denominada Minerales Monclova, S.A. de C.V. al que correspondió el número 115/99, todos ellos del conocimiento del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila.

En relación con Abelardo y Guillermo Jiménez Buentello el Juez del conocimiento sobreseyó el juicio respectivo por falta de interés jurídico de los promoventes al no haberse afectado su predio por la resolución combatida.

En lo relativo a Jesús Díaz Díaz el Juez Tercero de Distrito le otorgó el amparo, de conformidad con las siguientes consideraciones:

"Ahora bien, del análisis de la resolución combatida, se advierte que en ésta se alteraron los hechos en que pretende fundarse, bastando para llegar a esa conclusión, tomar en consideración lo expuesto en la referida sentencia, en la parte relativa en la que refiere que el grupo de solicitantes del nuevo centro de población que se denominará "Santa Rosa", en su escrito de fecha cinco de noviembre de mil novecientos setenta y uno, señalaron como afectable el predio denominado 'La Florida', lo que es falso, en primer lugar por no ser verdad que dicho escrito sea de esa fecha, sino del veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y uno, y en segundo lugar que en el referido escrito hayan señalado como afectable el citado predio, tan es así que en el expediente que instauró la Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal, bajo el número 626, la solicitud de referencia se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, el veintidós de abril de mil novecientos setenta y dos, y en el **Diario Oficial de la Federación** el catorce de agosto de mil novecientos noventa y seis, publicaciones de las cuales se adjuntaron copias como pruebas del quejoso, y de las cuales se advierte claramente, que los solicitantes, en su escrito de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y uno, dirigido al Delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, en su primer párrafo, expresan que al constituirse el referido centro de población, se denominará 'Santa Rosa', para lo cual señalaban como de posible afectación los predios 'Los Pintos', 'Babia' y 'San Jerónimo', ubicados en el Municipio de Múzquiz, Coahuila, lo cual aparece así en las dos publicaciones de referencia.

Por otra parte, quedó justificado en autos, la propiedad y posesión del inmueble en cuestión por parte del quejoso, con los elementos de convicción aportados por éste, consistentes en la escritura pública de propiedad número 41, de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y siete, inscrita con fecha ocho de abril de mil novecientos ochenta y siete, bajo la partida 7535, folio 24, del libro 214, sección I, respecto del predio denominado 'Francisco de la Florida', e informaciones testimoniales que rindieron los

señores Raúl G. Dávalos Flores, Salvador Pimentel Flores y Gilberto Guajardo Martínez, testigos que son coincidentes en indicar que el hoy demandante de garantías es propietario, ha tenido y tiene la posesión del predio rústico denominado 'Fracción de la Florida' ubicado en los municipios de Múzquiz y Progreso, ambos de esta Entidad Federativa, justificándose con dicho elemento probatorio la posesión que tiene hasta hoy del predio a que nos hemos referido.

Por otro lado, con las pruebas periciales que obran en el sumario, rendidas por los ingenieros Gonzalo Pichardo Peláez, Andrés de Hoyos Soto y Jorge Isauro Martínez Barrera, el primero de los mencionados por parte del Tribunal Superior Agrario, el segundo de parte del amparista, y el tercero en su carácter de perito oficial designado por este Organismo Jurisdiccional, en cuyos dictámenes se aprecia en concreto... que el predio rústico del quejoso Jesús Díaz Díaz, denominado 'Fracción de la Florida', sí está comprendido en un área de 1,476-50-52 hectáreas, dentro de la superficie de 2,300-00-00 hectáreas, de terreno que afectó el Tribunal Agrario en la sentencia que se reclama, y la exacta ubicación de esa área afectada, los peritos la precisan en sus respectivos dictámenes periciales y en los planos que lo complementan, dicho medio probatorio, administrado con el título de propiedad presentado por el impetrante de garantías con su demanda, y con la testimonial a su favor, y quienes como lo señalamos con anticipación, son coincidentes en señalar al hoy amparista como poseedor de la Fracción de la Florida, medios de convictivos los anteriores que ya han sido valorados con anticipación, y los que por consiguiente acreditan que el demandante de garantías tiene tanto la propiedad como la posesión jurídica y virtual del predio rústico denominado "Fracción de la Florida" y por tanto, la sentencia que reclama al Tribunal Superior Agrario, y por su plano proyecto de ejecución que también reclama, sí afecta un área de 1,476-50-52 hectáreas, del predio propiedad del quejoso Jesús Díaz Díaz, denominado 'Fracción de la Florida", por quedar comprendidas dentro de la superficie de 2,300-00-00 hectáreas de terreno que afectó el Tribunal Superior Agrario, en la sentencia dictada en el juicio agrario número 363/97, y no obstante dicha afectación agraria el amparista no fue citado ni oído previamente en el procedimiento agrario del que se habla en defensa de sus derechos de propiedad que tiene sobre el predio rústico que ya hemos precisado, resultando procedente este primer concepto de violación, y suficiente para conceder a Jesús Díaz Díaz, la protección federal solicitada, contra los actos de afectación y de privación que reclama, ello a fin de que se restituya en el pleno goce de sus garantías individuales violadas.

Por otra parte, y en lo referente a lo alegado por el demandante constitucional en su segundo concepto de violación, y en atención a que el título de propiedad que ofreció como prueba es suficiente para acreditar que el predio rústico a que se refiere y precisa en su demanda de amparo, efectivamente la adquirió, de las personas que a su vez las tenían inscritas a su favor en el Registro Público de la Propiedad con sede en Sabinas, Coahuila, y la referida adquisición la efectuó sin que dicho bien reportar gravámenes o anotaciones agrarias que limitaran sus derechos sobre la misma, por lo que dichos motivos son suficientes para reconocer que Jesús Díaz Díaz, es un adquirente de buena fe respecto al predio a que hemos hecho alusión... por lo que resulta violatoria de garantías dada la base falsa en la que se fundó para dictar la resolución combatida por esta instancia, pues como ya lo hemos apuntado tantas veces, los solicitantes en ningún momento señalaron el predio denominado 'La Florida', por lo que es manifiesta la incongruencia del Tribunal Superior Agrario, en la que afecta predios no señalados para afectación como en el caso concreto el denominado 'La Florida', ello en detrimento y perjuicio del demandante constitucional, como actual propietario y poseedor de fracciones de terreno de agostadero que forman parte del predio rústico que fue 'La Florida'.

En este orden de ideas, lo procedente es conceder a Jesús Díaz Díaz el amparo y protección de la justicia federal".

Cabe aclarar que Jesús Díaz Díaz defiende una superficie ubicada en el predio "La Florida" de 1,476-50-52 (mil cuatrocientas setenta y seis hectáreas, cincuenta áreas, cincuenta y dos centiáreas).

DECIMO QUINTO.- Por acuerdo de tres de marzo de dos mil este Tribunal Superior en sesión plenaria dejó parcialmente insubsistente la sentencia definitiva dictada por este Tribunal Ad Quem el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete en lo correspondiente al quejoso Jesús Díaz Díaz.

DECIMO SEXTO.- Igualmente en contra de la resolución pronunciada por este Tribunal Superior el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, Minerales Monclova, S.A. de C.V. promovió juicio de amparo del que tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, quien por sentencia de dieciséis de junio de dos mil dictada en el juicio de amparo número 115/99, concedió la protección de la justicia federal a la quejosa. Dicha resolución causó ejecutoria por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil. Al efecto se transcriben las partes conducentes de la sentencia en comento:

Dentro de la parte de resultandos se advierte que la quejosa Minerales Monclova, S.A. de C.V., reclama una superficie de 830-00-00 (ochocientos treinta hectáreas) tal y como se deduce de la siguiente transcripción:

“Reclamamos específicamente el desposeimiento, en perjuicio directo de la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., como causahabiente de la Compañía Minera La Florida de Múzquiz, S.A. de C.V. de un área de ochocientos treinta hectáreas, del predio rústico de su propiedad y posesión”

Asimismo, se denota que con las diversas documentales aportadas por “la empresa quejosa acreditó, fehacientemente, tener la titularidad del predio reclamado, puesto que demostró que Javier, Miguel y Teresa, todos de apellido Múzquiz Cantú, transmitieron la propiedad de aquél, a favor de la Compañía Minera “La Florida de Múzquiz, S.A. de C.V.” mediante la compraventa respectiva, y que tal sociedad anónima la transmitió a su vez, mediante convenio en fusión a la Empresa ahora quejosa.

En este orden de ideas, se advierte de la ejecutoria que la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., es propietaria de la parte correspondiente del predio denominado “La Florida” en una superficie de 754-71-75 (setecientos cincuenta y cuatro hectáreas, setenta y un áreas, setenta y cinco centiáreas), según se desprende de la siguiente parte de la sentencia ejecutoriada en comento:

“Asimismo, la empresa inconforme acreditó con el desahogo de la prueba pericial que ofertó, que el área I, del predio “La Florida” resultó afectada en una superficie de setecientos cincuenta y cuatro hectáreas, setenta y un áreas, setenta y cinco centiáreas, con motivo de la resolución emitida el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete”.

Asimismo, la ejecutoria que se cita, estableció de manera sustancial lo siguiente:

“...si el predio “La Florida” pasó a formar parte del patrimonio de la empresa denominada Compañía Minera La Florida de Múzquiz, a través de la compra-venta que efectuó Javier Múzquiz Cantú, por sí y como representante legal de Miguel y Teresa de los propios apellidos, en favor de aquella, acto jurídico el que surtió efectos legales frente a terceros a partir del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y uno, en que quedó registrada la escritura respectiva en el Registro Público de la Propiedad de Sabinas, Coahuila: y, si los trabajos técnicos informativos efectuados al predio de mérito se realizaron, por el ingeniero Raúl Rodríguez Valdés, con posterioridad a tal registro, esto es, el siete de mayo de mil novecientos noventa y tres, en que rindió su informe, resulta meridianamente claro, que las autoridades agrarias que conocieron el procedimiento agrario de donde derivan los actos reclamados, debieron notificar de la posible afectación al predio de mérito, a la empresa denominada Compañía Minera La Florida de Múzquiz, Sociedad Anónima de Capital Variable, causante de la empresa ahora quejosa, y no a Miguel, Teresa y Javier de apellidos Múzquiz Cantú, pues el predio en comento ya no formaba parte de su patrimonio, merced a la compraventa que efectuaron a favor de aquélla, en la indicada fecha; notificación que procedía se realizara a tal empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 329, párrafo tercero, de la Ley Federal de Reforma Agraria, vigente en la época de inicio del procedimiento agrario de que se trata; máxime que, menester es precisar lo, el referido predio La Florida, no fue señalado en la solicitud de creación de nuevo centro de población, como posible afectado...’; artículo que, textualmente dice (se transcribe) En ese contexto, como ninguna de las autoridades que conocieron del procedimiento agrario realizó tal notificación a la empresa Compañía Minera La Florida de Múzquiz, propietaria del predio afectado, es incuestionable que violaron en perjuicio de la empresa ahora quejosa, en su carácter de causahabiente de aquélla, las garantías de audiencia y defensa contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales...’ por tanto lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que, el Tribunal Superior Agrario responsable, deje insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar emita otra en la que ordene reponer el procedimiento agrario, hasta antes de la citada violación esto es, hasta aquélla actuación en la que el Cuerpo Consultivo Agrario, omitió notificar a la empresa quejosa la posible afectación del predio de su propiedad denominado ‘La Florida’. No es óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho de que la parte tercero perjudicado hubiere acreditado, mediante el desahogo de la prueba de inspección judicial que ofertó, que las tierras objeto de la inspección son de temporal, que no se encontró dentro de ellas, ningún asentamiento humano, por sus profundos para extracción de agua, ni equipo de riego, y que los ejidatarios del centro de población ejidal Santa Rosa, no interrumpen los trabajos de la empresa que labora en esa área, entre otras cosas; pues el resultado del desahogo de tal medio de convicción resulta intrascendente”.

DECIMO SEPTIMO.- Por acuerdo plenario de veintiuno de septiembre de dos mil este Tribunal Superior dejó parcialmente insubsistente la sentencia pronunciada por dicho órgano el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, respecto del quejoso Minerales Monclova, S.A. de C.V., con lo cual dejó insubsistente en su totalidad dicha sentencia al considerar también al quejoso Jesús Díaz Díaz.

DECIMO OCTAVO.- Asimismo y en cumplimiento a la propia ejecutoria, mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil, el Magistrado Instructor ordenó la reposición del procedimiento referido por la ejecutoria y ordenó la notificación a la quejosa, para lo cual se giró despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20 con sede en la ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila, al tiempo de proporcionarles un plazo de cuarenta y cinco días para que una vez notificadas las partes, pudieran presentar medios de prueba. Toda vez que fue diligenciado el despacho, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20 remitió las constancias respectivas a este Tribunal Superior, y

CONSIDERANDO :

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; y 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- La presente sentencia se emite en cumplimiento a las ejecutorias dictadas por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, la primera correspondiente al juicio de amparo número 91/98 de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y la segunda inherente al juicio de amparo número 115/99 de dieciséis de junio de dos mil.

TERCERO.- Inicialmente debe mencionarse que en estricto cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el amparo número 91/98 promovido por Abelardo y Guillermo Jiménez Buentello, respecto de estos quejosos la ejecutoria de mérito sobreseyó en relación con los mencionados peticionarios de garantías, por lo que en este orden de ideas no se realiza por parte de este Tribunal pronunciamiento alguno.

Ahora bien, por lo que corresponde al referido juicio de garantías, respecto del quejoso Jesús Díaz Díaz debe destacarse que la ejecutoria en comento establece en su parte medular que la sentencia impugnada, la cual pronunciada por este Tribunal Superior Agrario de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete en los autos del juicio agrario número 363/97 menciona que dentro de la misma "Se alteraron los hechos en que pretende fundarse, bastando para llegar a esa conclusión, tomar en consideración lo expuesto en la referida sentencia, en la parte relativa en la que refiere que el grupo de solicitantes del nuevo centro de población ejidal que se denominará "Santa Rosa", en su escrito de fecha cinco de noviembre de mil novecientos setenta y uno, señalaron como afectable el predio denominado "La Florida", lo que es falso, en primer lugar por no ser verdad que dicho escrito sea de esa fecha, sino del veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y uno, y en segundo lugar que en el referido escrito hayan señalado como afectable el citado predio... por lo que resulta violatoria de garantías dada la base falsa en la que se fundó para dictar la resolución combatida por esta instancia, pues como ya lo hemos apuntado tantas veces los solicitantes en ningún momento señalaron el predio denominado "La Florida", por lo que es manifiesta la incongruencia del Tribunal Superior Agrario en la que afecta predios no señalados para afectación como en el caso concreto el denominado "La Florida".

Por otro lado, derivado de la propia ejecutoria resulta concluyente que Jesús Díaz Díaz es propietario de una superficie de 1,476-50-52 (mil cuatrocientas setenta y seis hectáreas, cincuenta áreas, cincuenta y dos centiáreas), las cuales se encuentran ubicadas en una fracción del predio denominado "La Florida", tal y como se deriva de la sentencia ejecutoriada dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila al señalar que: "Quedó justificado en autos, la propiedad y posesión del inmueble por parte del quejoso, con los elementos de convicción aportados por éste, consistentes en la escritura pública de propiedad número 41 de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y siete, inscrita con fecha ocho de abril de mil novecientos ochenta y siete, bajo la partida 7535, folio 24, del libro 214, sección I respecto del predio denominado "Fracción de La Florida", e informaciones testimoniales que rindieron los señores Raúl G. Dávalos Flores, Salvador Pimentel Flores y Gilberto Guajardo Martínez, testigos que son coincidentes en indicar que el hoy demandante de garantías es propietario, ha tenido y tiene la posesión del predio rústico denominado "Fracción de La Florida":

Igualmente se desprende de la sentencia ejecutoriada tantas veces citada que Jesús Díaz Díaz resultó afectado en una superficie de 1,476-50-52 (mil cuatrocientas setenta y seis hectáreas, cincuenta áreas, cincuenta y dos centiáreas) al mencionar que: que el predio rústico del quejoso Jesús Díaz Díaz, denominado 'Fracción de la Florida', sí está comprendido en un área de 1,476-50-52 hectáreas, dentro de la superficie de 2,300-00-00 hectáreas, de terreno que afectó el Tribunal Agrario en la sentencia que se reclama, y la exacta ubicación de esa área afectada, los peritos la precisan en sus respectivos dictámenes periciales y en los

planos que lo complementan, dicho medio probatorio, adminiculado con el título de propiedad presentado por el impetrante de garantías con su demanda, y con la testimonial a su favor, y quienes como lo señalamos con anticipación, son coincidentes en señalar al hoy amparista como poseedor de la Fracción de la Florida, medios convictivos los anteriores que ya han sido valorados con anticipación, y los que por consiguiente acreditan que el demandante de garantías tiene tanto la propiedad como la posesión jurídica y virtual del predio rústico denominado "Fracción de la Florida" y por tanto, la sentencia que reclama al Tribunal Superior Agrario, y por su plano proyecto de ejecución que también reclama, sí afecta un área de 1,476-50-52 hectáreas, del predio propiedad del quejoso Jesús Díaz Díaz, denominado 'Fracción de la Florida', por quedar comprendidas dentro de la superficie de 2,300-00-00 hectáreas de terreno que afectó el Tribunal Superior Agrario, en la sentencia dictada en el juicio agrario número 363/97".

Bajo este contexto debe señalarse la identidad que existe entre el predio de Jesús Díaz Díaz en la fracción respectiva del inmueble denominado "La Florida", conforme al peritaje del tercero en discordia, el cual manifestó en su conclusión que:

"Sí existe identidad tanto formal como material en ambos predios el área I que es propiedad de la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V. y el predio propiedad del C. JESUS DIAZ DIAZ, ambos predios se encuentran delimitados físicamente mediante cerca de alambre de púas y postas de madera en más de un 90% de sus superficies, su calidad es de agostadero, dedicados superficialmente a la ganadería extensiva, con algunas muy pequeñas superficies de agricultura de temporal. El subsuelo de estos predios se encuentra dedicado a la minería, específicamente extracción de carbón mineral, la totalidad del subsuelo está concesionado mediante denuncios mineros a terceras personas ajenas al presente juicio agrario, quienes se dedican a la extracción del carbón, mismo que es comercializado a la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., quien en su predio "área I" a un costado del poblado "La Florida" tiene instalada desde hace muchos años una planta lavadora de carbón, se aprecian dentro de la superficie de ambos predios minas a cielo abierto conocidas como tajos y minas subterráneas mediante túneles o galerías. Los dos predios se localizan al sureste de la ciudad de Melchor Múzquiz, partiendo de ésta por la carretera que conduce a Nueva Rosita, a la altura de la población de Palau, se toma hacia el sureste otra carretera que conduce a la población de Minas de Barroterán, en la cual se toma una brecha de tercería con rumbo poniente, hasta llegar al poblado denominado minerales "La Florida", donde se ubica la lavadora de carbón que lleva el mismo nombre, poblado y lavadora se encuentran dentro del predio propiedad de la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., colinda con este predio al lado sur se encuentra el predio propiedad de C. JESUS DIAZ DIAZ. De los predios antes referidos el que es propiedad de la empresa mineral Monclova se encuentra en su totalidad dentro del Municipio de Melchor Múzquiz y el predio propiedad del C. JESUS DIAZ DIAZ se encuentra comprendido dentro de dos municipios, el Municipio de Melchor Múzquiz donde se encuentra la mayor parte del predio y el Municipio de Progreso, los dos municipios pertenecen al Estado de Coahuila.

El presente dictamen se rinde con apego a los cuestionamientos formulados por las partes mismos que obran en autos dentro a fojas 08 y 33 del despacho S-14/2001, anexando plano elaborado con motivo del levantamiento topográfico en el que se ilustran ambos predios, asimismo se anexan cuadros de construcción de los mismos. También se anexa un acta circunstanciada levantada con motivo de una inconformidad manifestada por los representantes de los poblados solicitantes. Para la realización del presente trabajo se empleó una estación total (teodolito-distanciómetro) de la marca Pentax, una computadora de campo para procesar los datos, de la misma marca Pentax, apoyado en un G.P.S. de la marca Magallanes, (posicionador global de satélites) para obtener información de las proyecciones transversas de mercator (coordenadas U.T.M.) vía satélite".

Asimismo debe señalarse que el amparista Jesús Díaz Díaz ofreció la prueba testimonial a cargo de Raúl Dávalos Flores y Salvador Pimentel Torres quienes manifestaron en la audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil uno, realizada ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, que conoce el predio rústico denominado "La Fracción de La Florida" el cual se encuentra localizado en los municipios de Múzquiz y Progreso, siendo la calidad de tierras de agostadero, el cual pertenece a Jesús Díaz Díaz quien lo tiene en posesión desde hace catorce años aproximadamente, en calidad de propietario, el cual se encuentra explotado por su dueño ganaderamente, con ganado bovino, becerros cruzados y caprinos, asimismo manifestó el testigo que su propietario lo dedica a la distribución de aguajes y efectúa limpieza de estanques así como lleva a cabo tareas de complementación de cercos; de igual forma aseveró que el predio en comento lo está poseyendo Jesús Díaz Díaz a quien conoce desde hace catorce años, ya que, en su calidad de médico veterinario ha atendido a los animales propiedad de Jesús Díaz Díaz.

Por lo que corresponde al segundo testigo Salvador Pimentel Torres, el declarante estableció que conoce el predio rústico denominado "La Fracción de La Florida" el cual se encuentra localizado en los Municipio de Múzquiz, siendo la calidad de tierras de agostadero, el cual pertenece a Jesús Díaz Díaz quien lo tiene en posesión aproximadamente entre doce y quince años, en calidad de propietario, el cual se encuentra explotado por su dueño ganaderamente, asimismo manifestó el testigo que su propietario lo dedica a la distribución de aguajes y efectúa limpieza de estanques así como lleva a cabo tareas de complementación de cercos; de igual forma aseveró que el predio en comento lo está poseyendo Jesús Díaz Díaz a quien conoce desde hace aproximadamente siete años.

En este orden de ideas, resulta concluyente con base en las consideraciones establecidas en la ejecutoria que se cumplimenta, que en efecto, como se desprende de autos, los solicitantes del Nuevo Centro de Población Ejidal que de constituirse se denominará "Santa Rosa" no señalaron el predio "La Florida" como de posible afectación; igualmente resulta concluyente que Jesús Díaz Díaz es propietario de una superficie de 1,476-50-52 (mil cuatrocientas setenta y seis hectáreas, cincuenta áreas, cincuenta y dos centiáreas) que corresponden a una fracción del predio denominado "La Florida", superficie que conforme a los peritajes descritos en la ejecutoria, resultó afectada por la resolución multicitada de este tribunal, especificándose por los testigos Raúl Dávalos Flores y Salvador Pimentel Torres que el referido Jesús Díaz Díaz en su calidad de propietario, ha explotado con dedicación ganadera la superficie en comento desde hace aproximadamente quince años, circunstancia coincidente en ambos testigos. En esta tesitura debe concluirse que en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada tantas veces citada y, conforme al lineamiento específico, que al no haberse señalado por los peticionarios de la acción agraria que se resuelve el predio "La Florida", como susceptible de afectación, el mismo no resulta idóneo jurídicamente para tal efecto.

En lo atinente a la probanza pericial aportada por Jesús Díaz Díaz e igualmente con el dictamen del perito tercero y, de conformidad con los lineamientos precisados en la ejecutoria que se cumplimenta, respecto de dicho medio de prueba, resulta concluyente que la fracción respectiva del predio denominado "La Florida" es propiedad de Jesús Díaz Díaz, superficie que ha quedado plenamente identificada, en términos de la propia ejecutoria y de las periciales relacionadas anteriormente, respecto de una superficie de 1,476-50-52 (mil cuatrocientas setenta y seis hectáreas, cincuenta áreas, cincuenta y dos centiáreas) tal y como se deriva de los diversos contextos probatorios que se han analizado. Dicho medio de prueba se valora, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 143 a 156 del Código Federal de Procedimientos Civiles e igualmente con fundamento en lo contemplado por el artículo 211 del propio ordenamiento.

De igual manera y a mayor abundamiento se establece, respecto, de la prueba testimonial aportada por Jesús Díaz Díaz y a cargo de Raúl Dávalos Flores y Salvador Pimentel Torres que el predio denominado fracción de "La Florida", es propiedad de Jesús Díaz Díaz, con la superficie anteriormente especificada, el cual se encontraba en explotación por su propietario desde hace aproximadamente quince años, circunstancia que se acreditó por Jesús Díaz Díaz con base en este elemento probatorio, sin que se desprenda de autos que dicho contexto jurídico y fáctico hubiese sido impugnado por la contraparte ni tampoco que éste fuera desvirtuado por la misma, de lo que se concluye que el predio de referencia fue explotado por su propietario en los términos precedentes. Dicha probanza se valora en términos de los numerales 165 a 167 y 214 al 216 del propio ordenamiento legal.

Por lo anterior debe considerarse como inafectable, de conformidad con lo previsto en los numerales 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el predio propiedad de Jesús Díaz Díaz.

CUARTO.- En lo atinente a la ejecutoria de amparo contenida en el juicio de garantías número 115/99, promovido por la Compañía denominada Minerales Monclova, S.A. de C.V., debe manifestarse inicialmente que igualmente la Empresa quejosa resultó beneficiada con la protección de la justicia federal respecto de una superficie de 830-00-00 (ochocientos treinta hectáreas) según se desprende del escrito de la quejosa inserto en la ejecutoria de referencia la cual contempla lo siguiente: "Les reclamamos específicamente el desposeimiento, en perjuicio directo de la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., como causahabiente de la Compañía Minera La Florida de Múzquiz, S.A. de C.V., de un área de ochocientos treinta hectáreas, del predio rústico de su propiedad".

Por otro lado es de destacarse que igualmente en la solicitud de tierras para constituir el Nuevo Centro de Población Ejidal denominado "Santa Rosa", los peticionarios de la acción agraria a que se hace mérito, no señalaron el predio denominado "La Florida", propiedad, entre otros, de la Empresa quejosa Minerales Monclova, S.A. de C.V. como de posible afectación tal y como se desprende de la ejecutoria emitida por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de dieciséis de junio de dos mil, pronunciada en el juicio de

amparo 115/99 la cual contempla "Menester es precisando, el referido predio "La Florida", no fue señalada en la solicitud de creación de nuevo centro de población ejidal, como posible afectado".

De igual forma y en obsequio de los términos y lineamientos establecidos por la ejecutoria que se cumplimenta, debe considerarse que la negociación a que se hace mérito es propietaria de dicha superficie en virtud de que como ha quedado asentado, la ejecutoria de dieciséis de junio de dos mil emitida por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, concluyó que el tracto sucesivo de las diversas compraventas, partiendo de Miguel Múzquiz Aldape, quien transmitió a sus descendientes Javier, Miguel y Teresa Múzquiz Cantú y éstos a su vez celebraron compraventa con la Empresa denominada Compañía Minera "La Florida", la cual fue fusionada a la Empresa denominada Minerales Monclova, S.A. de C.V. fue válido desde la óptica jurídica.

Por otro lado se estima tal y como se aprecia de la ejecutoria multicitada que la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., resultó afectada en una superficie de 830-00-00 (ochocientas treinta hectáreas) comprendidas dentro del predio denominado "La Florida", lo cual se colige del medio de prueba pericial, citado en la respectiva ejecutoria.

Asimismo, las probanzas periciales aportadas por la empresa quejosa así como la del tercero en discordia manifiestan la identidad existente respecto de la fracción del predio "La Florida" en una superficie de 830-00-00 (ochocientas treinta hectáreas) que defiende la quejosa. Al efecto se transcribe la parte respectiva de la pericial a cargo de este último.

CONCLUSION

"Sí existe identidad tanto formal como material en ambos predios el área I que es propiedad de la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V. y el predio propiedad del C. JESUS DIAZ DIAZ, ambos predios se encuentran delimitados físicamente mediante cerca de alambre de púas y postas de madera en más de un 90% de sus superficies su calidad es de agostadero, dedicados superficialmente a la ganadería extensiva, con algunas muy pequeñas superficies de agricultura de temporal. El subsuelo de estos predios se encuentra dedicado a la minería, específicamente extracción de carbón mineral, la totalidad del subsuelo está concesionado mediante denuncios mineros a terceras personas ajenas al presente juicio agrario, quienes se dedican a la extracción del carbón, mismo que es comercializado a la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., quien en su predio "área I" a un costado del poblado "La Florida" tiene instalada desde hace muchos años una planta lavadora de carbón, se aprecian dentro de la superficie de ambos predios minas a cielo abierto conocidas como tajos y minas subterráneas mediante túneles o galerías. Los dos predios se localizan al sureste de la ciudad de Melchor Múzquiz, partiendo de ésta por la carretera que conduce a Nueva Rosita, a la altura de la población de Palau, se toma hacia el sureste otra carretera que conduce a la población de Minas de Barroterán, en la cual se toma una brecha de tercería con rumbo poniente, hasta llegar al poblado denominado minerales "La Florida", donde se ubica la lavadora de carbón que lleva el mismo nombre, poblado y lavadora se encuentran dentro del predio propiedad de la empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V., colinda con este predio al lado sur se encuentra el predio propiedad de C. JESUS DIAZ DIAZ. De los predios antes referidos el que es propiedad de la empresa mineral Monclova se encuentra en su totalidad dentro del municipio de Melchor Múzquiz y el predio propiedad del C. JESUS DIAZ DIAZ se encuentra comprendido dentro de dos municipios, el municipio de Melchor Múzquiz donde se encuentra la mayor parte del predio y el municipio de Progreso, los dos municipios pertenecen al estado de Coahuila.

El presente dictamen se rinde con apego a los cuestionamientos formulados por las partes mismos que obran en autos dentro a fojas 08 y 33 del despacho S-14/2001, a anexando plano elaborado con motivo del levantamiento topográfico en el que se ilustran ambos predios, asimismo se anexan cuadros de construcción de los mismos. También se anexa un acta circunstanciada levantada con motivo de una inconformidad manifestada por los representantes de los poblados solicitantes. Para la realización del presente trabajo se empleó una estación total (teodolito-distanciómetro) de la marca Pentax, una computadora de campo para procesar los datos, de la misma marca Pentax, apoyado en un G.P.S. de la marca Magallanes, (posicionador global de satélites) para obtener información de las proyecciones transversas de mercator (coordenadas U.T.M.) vía satélite".

Bajo este contexto debe señalarse la identidad que existe entre el predio de la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V. en la fracción respectiva del inmueble denominado "La Florida" conforme al peritaje del tercero en discordia.

Ahora bien, como se aprecia de los trabajos técnicos informativos, contenidos en el expediente relacionado con la dotación de tierras del poblado "La Florida", el cual se encuentra vinculado con el de "Santa Rosa", trabajos que fueron efectuados por el comisionado Jorge Macedo García de veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, relacionados en el resultando cuarto de esta sentencia los

cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 143 a 160 en relación con el artículo 211, todos ellos del Código Federal de Procedimientos Civiles, la totalidad del predio "La Florida" se localizó en explotación ganadera con cuatrocientas cabezas de ganado mayor y ciento veinte de ganado menor, al tiempo que existen instalaciones relacionadas con la explotación minera.

De igual forma los trabajos técnicos contenidos en el expediente del poblado "Santa Rosa", de seis de marzo de mil novecientos setenta y seis, relacionados en el resultando quinto de esta sentencia, localizaron los predios "Los Corrales", "Las Cumbres", "El Palmar", "Los Pintos", "Rincón de María", así como los inmuebles propiedad de Diego Javier Elguezabal, Gilberto Eduardo Elguezabal, Alberto Múzquiz Elguezabal y Gloria Estela Elguezabal Mantes, en explotación, al tiempo, que varios de ellos contaban con certificado de inafectabilidad en tanto que el coeficiente de agostadero correspondiente era de 15.6 hectáreas por unidad animal mayor. Las documentales de referencia tienen pleno valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 143 a 160 en relación con el artículo 211, todos ellos del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En lo atinente a la probanza pericial aportada por la compañía denominada Minerales Monclova, S.A. de C.V. e igualmente con el dictamen del perito tercero y, de conformidad con los lineamientos precisados en la ejecutoria que se cumplimenta, respecto de dicho medio de prueba, resulta concluyente que la fracción respectiva del predio denominado "La Florida" es propiedad de la referida empresa, superficie que ha quedado plenamente identificada, en términos de la propia ejecutoria y de las periciales relacionadas anteriormente, respecto de una superficie de 830-00-00 (ochocientos treinta hectáreas) tal y como se deriva de los diversos contextos probatorios que se han analizado. Dicho medio de prueba se valora, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 143 a 156 del Código Federal de Procedimientos Civiles e igualmente con fundamento en lo contemplado por el artículo 211 del propio ordenamiento.

De igual forma la Empresa en comentario ofreció la probanza testimonial sita a foja 62 y siguientes del despacho diligenciado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, desahogada el veintisiete de septiembre de dos mil uno y a cargo de Jesús Hernández Limón, Juan Héctor Tort Esquinca y Andrés de Hoyos Soto quienes coincidentemente declaran que conocen a la Empresa Denominada Minerales Monclova, S.A. de C.V., asimismo que conocieron a la Compañía Minera "La Florida", y que el predio rústico controvertido fue propiedad de dicha Compañía, conociendo que el nombre del mismo predio era el de "La Florida", ubicado en el Municipio de Múzquiz, Coahuila, conociendo que las tierras son de mala calidad concretamente de agostadero y que el predio tiene una superficie aproximada de 2,500-00-00 (dos mil quinientas hectáreas) dividido en tres fracciones, habiendo tenido la posesión inicialmente la Compañía Minera La Florida de Múzquiz en tanto que actualmente es la Compañía Minerales Monclova quien se encuentra en posesión del predio a partir de mil novecientos noventa y ocho, siendo propietaria del predio, dedicándose según Jesús Hernández al lavado de carbón, almacenamiento de presa de jales a material estéril, y a los caminos de acceso al carbón, en tanto que Héctor Tort manifestó que se dedica a beneficiar mineral y Andrés Hoyos que se dedica a la exploración y explotación de recursos minerales, resultando también que la empresa se dedica a la búsqueda de vetas minerales. Todo lo anterior en referencia a que los testigos laboraban en la empresa a que se hace mérito y tienen al menos veinte años de vivir en ese lugar.

En este orden de ideas, resulta concluyente con base en las consideraciones establecidas en la ejecutoria que se cumplimenta, que en efecto, como se desprende de autos, los solicitantes del Nuevo Centro de Población Ejidal que de constituirse se denominará "Santa Rosa" no señalaron el predio "La Florida" como de posible afectación; igualmente resulta concluyente que Minerales Monclova, S.A. de C.V. es propietario de una superficie de 830-00-00 (ochocientos treinta hectáreas) que corresponden a una fracción del predio denominado "La Florida", superficie que conforme a los peritajes descritos en la ejecutoria, resultó afectada por la resolución multicitada de este tribunal, especificándose por los testigos Jesús Hernández Limón, Juan Héctor Tort Esquinca y Andrés de Hoyos Soto que el referido predio ha permanecido explotado por sus diversos propietarios, dedicado inicialmente a la ganadería y con posterioridad el predio fue de vocación minera. En esta tesitura debe concluirse que en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada tantas veces citada y, conforme al lineamiento específico que al no haberse señalado por los peticionarios de la acción agraria que se resuelve el predio "La Florida", como susceptible de afectación, el mismo no resulta idóneo jurídicamente para tal efecto.

De igual manera y a mayor abundamiento se establece respecto de la prueba testimonial aportada por la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V. y a cargo de Jesús Hernández Limón, Juan Héctor Tort Esquinca y Andrés de Hoyos Soto, que el predio denominado fracción de "La Florida", es propiedad de Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V. con la superficie anteriormente especificada, el cual se encontraba en explotación por su propietario desde hace aproximadamente quince años, circunstancia que se acreditó por la

empresa en comento con base en este elemento probatorio, sin que se desprenda de autos que dicho contexto jurídico y fáctico hubiese sido impugnado por la contraparte ni tampoco que éste fuera desvirtuado por la misma, de lo que se concluye que el predio de referencia fue explotado por su propietario en los términos precedentes. Dicha probanza se valora en términos de los numerales 165 a 167 y 214 a 216 del propio ordenamiento legal.

Asimismo con base en los trabajos vinculados en el expediente del poblado "La Florida" de siete de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, realizados por el comisionado Jorge Macedo García, quien rindió su informe el veintiocho de noviembre de ese año, los cuales se relacionaron en el resultando cuarto de esta sentencia e igualmente, de conformidad con los trabajos técnicos e informativos de seis de marzo de mil novecientos setenta y seis vinculados en el resultado quinto de esta sentencia, se concluye de acuerdo a los primeros que el predio denominado "La Florida" se localizó explotado por su propietario en tanto que los relacionados en segundo término arrojaron que los predios "Los Corrales", "Las Cumbres", "El Palmar", "Los Pintos", "Rincón de María", así como los inmuebles propiedad de Diego Javier Elguezabal, Gilberto Eduardo Elguezabal, Alberto Múzquiz Elguezabal y Gloria Estela Elguezabal Mantas, en explotación, al tiempo, que varios de ellos contaban con certificado de inafectabilidad en tanto que el coeficiente de agostadero correspondiente era de 15.6 hectáreas por unidad animal mayor. Todas las documentales de referencia tienen pleno valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 143 al 160 en relación con el artículo 211, todos ellos del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anterior debe considerarse como inafectable, de conformidad con lo previsto en los numerales 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el predio propiedad de la Empresa Minerales Monclova, S.A. de C.V.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o., y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- En materia de la presente sentencia, es de negarse la acción de nuevo centro de población ejidal del poblado denominado "Santa Rosa", Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila, cumplimentándose las ejecutorias emitidas por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila dentro de los juicios de amparo números 91/98 de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y 115/99 dieciséis de junio de dos mil, respectivamente.

SEGUNDO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila y los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario.

TERCERO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Coahuila, a la Procuraduría Agraria y al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, el cumplimiento realizado a las ejecutorias dictadas por ese órgano jurisdiccional en los juicios de amparos números 91/98 y 115/99. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firman los Magistrados que lo integran, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a seis de septiembre de dos mil dos.- El Magistrado Presidente, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Luis Octavio Porte Petit Moreno**, **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Humberto Jesús Quintana Miranda**.- Rúbrica.